

RUTA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS GRUPOS ÉTNICOS.

**Mecanismo para la protección de los derechos territoriales de grupos étnicos en
situación de desplazamiento masivo o en riesgo por violencia o presencia de mega
proyectos económicos**

- Manual de aplicación -

**Área Grupos Étnicos
Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada**

Abril de 2010

INTRODUCCIÓN

La Ruta de Protección de los Derechos Territoriales Étnicos, en adelante Ruta Étnica, es un mecanismo especial de protección que contribuye a la salvaguarda de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y negros en situación de desplazamiento o en riesgo de estarlo, vulnerados o amenazados a causa de la violencia o por la construcción u operación de mega proyectos económicos tales como los monocultivos, la explotación minera, turística, portuaria u otro similar¹. Este mecanismo busca garantizar el derecho fundamental constitucional al territorio de estos grupos étnicos, al ser considerado como su principal medio de subsistencia física y espiritual con lo que se garantizaría su pervivencia social y culturalmente diferenciada.

En el núcleo esencial del derecho fundamental constitucional al territorio se encuentran e interrelacionan las dimensiones naturales, culturales, económicas, políticas y sociales que de manera específica concurren en el ámbito territorial de cada uno de estos grupos étnicos; en este marco la protección de derechos territoriales étnicos involucra integralmente la tierra, los ecosistemas y sus recursos naturales, el patrimonio cultural material e inmaterial, y demás bienes patrimoniales que puedan resultar afectados como consecuencia de los diferentes fenómenos de violencia u otras formas de intervención foránea sobre el territorio, o que de alguna manera imposibilite o dificulte la permanencia y convivencia pacífica de estos pueblos en los territorios ancestralmente ocupados o poseídos, estén o no formalmente reconocidos por parte del Estado .

En consecuencia, la Ruta Étnica establece el proceso de protección y salvaguarda de los derechos territoriales de los grupos étnicos mediante la identificación, la caracterización, el registro y publicidad de la situación de desplazamiento, la activación y puesta en marcha de los mecanismos e instrumentos estatales vigentes dispuestos para superar y regularizar la perturbación del goce de los derechos territoriales y patrimoniales así:

- I. Atención preferente en los procedimientos administrativos y judiciales de acceso a tierras colectivas y seguridad jurídica de las mismas.
- II. Recopilación y custodia de material probatorio para ser aportados a los procesos administrativos y judiciales de reparación y restitución a las comunidades víctimas de desplazamiento forzado.
- III. Identificación de comunidades con limitaciones al ejercicio del derecho sobre el manejo, uso y aprovechamiento tradicional de sus recursos naturales, para obtener atención estatal priorizada y concertada que garantice su protección y conservación.
- IV. Fortalecer autoridades y comunidades étnicas para que puedan cumplir sus funciones de ordenamiento, administración y manejo de sus territorios, a través

¹ Corte Constitucional estableció esta como categoría de afectación a los derechos territoriales de los grupos étnicos en los Autos 004 y 005 en relación con la Sentencia T- 025 de 2004.

- de mecanismos internos que protejan a los integrantes que han sido víctimas del desplazamiento forzado.
- V. Apoyo a la formulación e implementación de los planes de uso y manejo propios de las comunidades, así como los institucionales, planes de vida y planes de etnodesarrollo.
 - VI. Campañas de sensibilización a la sociedad en general sobre derechos territoriales étnicos, las medidas de protección y sus efectos.

Los fundamentos jurídicos de esta medida de protección se relacionan con los principios consagrados en:

- Constitución Política (Arts. 7, 8, 63, 70, 246, 286, 287, 329, 330, 55T y 56T).
- Convenio 169 de la OIT (aprobado por la Ley 21 de 1991).
- Convención UNESCO de 1972 (aprobada por la Ley 45 de 1983)
- Convención Americana de los Derechos Humanos.
- Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
- Principios Rectores para la Atención del Desplazamiento Interno.
- Principios de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Restitución de Viviendas y Patrimonio de Refugiados y Desplazados.
- Ley 387 de 1997.
- Leyes 70 de 1993 y 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios.
- Ley 1185 de 2008.
- Decreto 250 de 2005.
- Jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de atención al desplazamiento y a la protección de los derechos territoriales étnicos: Sentencia T – 025 de 2004 y sus Autos de Seguimiento A 218 de 2006, 004 y 005 de 2009.

Específicamente, el contenido de los Autos 004 y 005 de 2009²; y de manera más puntual la Orden Quinta de este último, en la cual la Corte Constitucional estableció:

“ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia, conjuntamente con el INCODER, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura, el IGAC y Acción Social, **poner en marcha, a más tardar el 30 de Octubre de 2009, la ruta étnica propuesta por Acción Social dentro del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio. La aplicación de esta ruta será obligatoria en situaciones de desplazamiento masivo**, cuando la Defensoría del Pueblo haya emitido un informe de riesgo que involucre a las comunidades afro colombianas, así como **en las zonas de desarrollo de mega proyectos económicos de monocultivos, explotación minera, turística o portuaria que involucre territorios ancestrales**. Igualmente, esta ruta de protección deberá ser aplicada **cuando los informes y análisis de las autoridades sobre la evolución de la situación de orden público señalen un riesgo particular para las comunidades afro colombianas** en determinadas regiones. Para ello podrán apoyarse en la información del Observatorio de

² Ver capítulo Derechos Territoriales de Grupos Étnicos en “La Protección de los derechos patrimoniales de la población en riesgo y situación de desplazamiento” – Compendio Normativo PPTP 2009.

Derechos Humanos y DIH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República.”³ Subrayado y negrilla fuera del texto

La Ruta Étnica es obligatoria para los pueblos indígenas y negros que se encuentren en situación de desplazamiento forzado o en riesgo de ello, por causa de los diferentes fenómenos de violencia o por la presencia en sus territorios de mega proyectos económicos tales como: monocultivos; minería; turismo; emprendimientos portuarios, u otros similares.

PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA APLICACIÓN DE LA RUTA ÉTNICA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES

1. Sobre los principios orientadores para la aplicación de la Ruta Étnica de Protección de Derechos Territoriales:

Los siguientes principios orientan el alcance y procedimiento de la Ruta Étnica de Protección de los Derechos Territoriales con fundamento en el marco normativo dispuesto en la Constitución, las normas internacionales referidas a los pueblos Indígenas y Negros (tribales) y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia:

1.1. Los pueblos indígenas y negros como sujetos colectivos titulares de derechos fundamentales constitucionales.

La Corte Constitucional reiterada e invariablemente ha venido considerando a los pueblos indígenas y negros como sujetos colectivos de derechos fundamentales constitucionales, que pueden ser exigibles a través del mecanismo judicial de la Acción de Tutela, tal como se expuso en la sentencia T – 380 de 1993, así:

“La protección que la Carta extiende a la anotada diversidad se deriva de la aceptación de formas diferentes de vida social cuyas manifestaciones y permanente reproducción cultural son imputables a estas comunidades como sujetos colectivos autónomos y no como simples agregados de sus miembros que, precisamente, se realizan a través del grupo y asimilan como suya la unidad de sentido que surge de las distintas vivencias comunitarias. La defensa de la diversidad no puede quedar librada a una actitud paternalista o reducirse a ser mediada por conducto de los miembros de la comunidad, cuando ésta como tal puede verse directamente menoscabada en su esfera de intereses vitales y, debe, por ello, asumir con vigor su propia reivindicación y exhibir como detrimentos suyos los perjuicios o amenazas que tengan la virtualidad de extinguirla. En este orden de ideas, no puede en verdad hablarse de protección de la diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento, si no se otorga, en el plano constitucional, personería sustantiva a las diferentes comunidades indígenas que es lo único que

³ República de Colombia; Corte Constitucional; 2009 “Auto 005 de 2009; parte resolutive, orden quinta”.

les confiere estatus para gozar de los derechos fundamentales y exigir, por sí mismas, su protección cada vez que ellos les sean conculcados (CP art. 1, 7 y 14)".

"(. . .)

"El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la Constitución supone la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental. Algunos grupos indígenas que conservan su lengua, tradiciones y creencias no conciben una existencia separada de su comunidad. El reconocimiento exclusivo de derechos fundamentales al individuo, con prescindencia de concepciones diferentes como aquellas que no admiten una perspectiva individualista de la persona humana, es contrario a los principios constitucionales de democracia, pluralismo, respeto a la diversidad étnica y cultural y protección de la riqueza cultural".

"Entre otros derechos fundamentales, las comunidades indígenas son titulares del derecho fundamental a la subsistencia, el que se deduce directamente del derecho a la vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución".

"La cultura de las comunidades indígenas, en efecto, corresponde a una forma de vida que se condensa en un particular modo de ser y de actuar en el mundo, constituido a partir de valores, creencias, actitudes y conocimientos, que de ser cancelado o suprimido - y a ello puede llegarse si su medio ambiente sufre un deterioro severo-, induce a la desestabilización y a su eventual extinción. La prohibición de toda forma de desaparición forzada (CP art. 12) también se predica de las comunidades indígenas, quienes tienen un derecho fundamental a su integridad étnica, cultural y social".

En igual sentido se puede constatar el reconocimiento de la calidad de sujetos colectivos de derechos fundamentales a los pueblos indígenas y negros en las normas del Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 21 de 1991 y el cual hace parte del bloque de constitucionalidad.

"Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos".⁴

Jurisprudencialmente se han reconocido a los pueblos indígenas algunos derechos fundamentales constitucionales:

"la Corte ha señalado que los derechos fundamentales de los cuales son titulares las comunidades indígenas son, básicamente, el derecho a la subsistencia, derivado de la protección constitucional a la vida (C.P., artículo 11); el derecho a la integridad étnica, cultural y social, el cual se desprende no sólo de la protección a la diversidad y del carácter pluralista de la nación (C.P., artículos 1° y 7°) sino,

⁴ Convenio 169 de la OIT, Artículo 3.1.

también, de la prohibición de toda forma de desaparición forzada (C.P., artículo 12); el derecho a la propiedad colectiva (C.P., artículos 58, 63 y 329); y, el derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en sus territorios.[18]”
(...)

“El desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, que es mucho más extenso que el reseñado anteriormente, ha atribuido a las comunidades indígenas, en tanto sujetos colectivos de derechos, ciertos derechos fundamentales de los que son titulares los individuos. De acuerdo al desarrollo jurisprudencial se tiene que son derechos fundamentales de los pueblos indígenas, entre otros, el derecho a la integridad étnica y cultural[36] que comprende el derecho a la supervivencia cultural, el derecho a la preservación de su hábitat natural[37], el derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra habitada por la comunidad[38], el derecho a determinar sus propias instituciones jurídicas[39], el derecho a administrar justicia en su territorio y a regirse por sus propias normas y procedimientos[40], el derecho de la comunidad a determinarse por su cosmovisión religiosa y a hacerla valer ante terceros[41], el derecho a participar en la toma de decisiones que puedan afectarlos[42] y el derecho a acudir a la justicia como comunidad[43].

Los mencionados derechos han sido calificados como derechos de naturaleza colectiva que buscan proteger la identidad cultural de las comunidades indígenas configurándolas como sujetos de derechos fundamentales.”

Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y negros en el Convenio 169 son entre otros:

- Derecho a permanecer y desarrollarse como sociedades culturalmente diferenciadas de la sociedad nacional.
- Derecho a que se les reconozca la propiedad sobre los territorios poseídos y ocupados ancestralmente.
- Derecho a que se les reconozca la propiedad, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de sus territorios.
- Derecho a ser consultados previamente cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos directamente.
- Derecho a establecer sus propias prioridades en cuanto al modelo de desarrollo.
- Derecho a la autonomía local y a través de sus propias instituciones, normas y autoridades.
- Derecho a no ser trasladados o reubicados de sus territorios, sin su consentimiento previo, libre e informado y a regresar cuando cesen las causas que lo hubieren motivado.

1.2. El territorio como instrumento de realización de derechos y libertades fundamentales

La Corte Constitucional ha resaltado el derecho al territorio de los grupos étnicos como un derecho fundamental e instrumento de realización de otros derechos. Entre otras en las Sentencias T-188/93 T-634/99 la Corte señaló:

“El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes. Esta circunstancia es reconocida en convenios internacionales aprobados por el Congreso¹, donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Adicionalmente, el Constituyente resaltó la importancia fundamental del derecho al territorio de las comunidades indígenas.

Sin este derecho los anteriores (derechos a la identidad cultural y a la autonomía) son sólo reconocimientos formales. El grupo étnico requiere para sobrevivir del territorio en el cual está asentado, para desarrollar su cultura. Presupone el reconocimiento al derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales ocupados y los que configuran su hábitat².

*Lo anterior permite ratificar el **carácter fundamental del derecho de propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios.**”* (Negrilla fuera del texto)

El territorio es el medio de realización de otros derechos fundamentales de los grupos étnicos como los derechos económicos, sociales y culturales que requieren ser protegidos para garantizar la integridad física y cultural de los pueblos.

Sin embargo, aun cuando los territorios étnicos tienen constitucionalmente el carácter de inembargables, inalienables e imprescriptibles, esto no ha blindado de manera plena a los pueblos negros e indígenas de las presiones derivadas de la disputa por el control del territorio que ejercen los actores del conflicto y los intereses económicos superpuestos sobre estos territorios. Estas situaciones están relacionadas con la usurpación de territorios, el confinamiento, las privaciones de movilidad dentro y fuera del territorio, las ventas y arrendamientos ilegales de los derechos territoriales colectivos, sean estos usufructos familiares en el caso de las comunidades negras o asignaciones familiares en el caso de las comunidades indígenas, entre otros.

El territorio es también el espacio de construcción y re-creación del patrimonio cultural material e inmaterial.

1.3. El derecho fundamental constitucional a la Consulta Previa de los pueblos indígenas y negros en las decisiones administrativas y legislativas que les afecte.

¹Ley 21 de 1991 aprobatoria del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT., Ginebra 1989.

² Asamblea Nacional Constituyente. Ponencia Los Derechos de los Grupos Étnicos. Constituyente Francisco Rojas Birry. Gaceta Constitucional No. 67. Pág. 18. Citado por la Corte Constitucional en la Sentencia T – 188 de 1999

En los aspectos relacionados con las afectaciones al territorio la Corte Constitucional ha señalado tanto para comunidades negras como para pueblos indígenas lo siguiente:

*"A juicio de la Corte, la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad el hecho o la circunstancia observada en el sentido de que la referida participación, **a través del mecanismo de la consulta**, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social"*

"El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho fundamental (art. 40-2 C.P.), tiene un reforzamiento en el Convenio número 169, aprobado por la ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos. De este modo, el citado Convenio, que hace parte del ordenamiento jurídico en virtud de los Art. 93 y 94 de la Constitución, integra junto con la aludida norma un bloque de constitucionalidad que tiende a asegurar y hacer efectiva dicha participación."

1.4. El derecho fundamental al autogobierno local de los pueblos indígenas

La autonomía territorial, es decir, la facultad de gobernarse por autoridades propias y de conformidad con sus instituciones y normas fue reconocida a los pueblos indígenas en la Constitución Política según lo establecen los artículos 286, 287, 329, 330 y 56 transitorio. En el artículo 330 se dispone:

"ARTICULO 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:

- 1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios.*
- 2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.*
- 3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.*
- 4. Percibir y distribuir sus recursos.*
- 5. Velar por la preservación de los recursos naturales.*
- 6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.*
- 7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.*
- 8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y*

9. Las que les señalen la Constitución y la ley.

PARAGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.”

1.5.- El derecho propio en las comunidades negras.-

Mediante el Decreto 1745 de 1995 se reglamentó el procedimiento para reconocer el derecho de propiedad a los pueblos negros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 transitorio de la Constitución y la Ley 70 de 1993, allí se consagró el derecho propio de las comunidades negras, el cual se expresa en los reglamentos internos y en el plan de uso y manejo que orienta su plan de vida, como la relación con los actores externos, así:

“Artículo 3°. Definición. Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.

En los términos del numeral 5°, artículo 2° de la Ley 70 de 1993, Comunidad Negra es el conjunto de familias de ascendencia afro colombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.

Al Consejo Comunitario lo integran la Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario.

Artículo 4°. La Asamblea General. Para los efectos del presente Decreto, la Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y estará conformada por las personas reconocidas por éste, de acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el censo interno. (...)

Artículo 6°. Funciones de la Asamblea General:(...)

4. Aprobar el reglamento de usos y traspasos del usufructo de las tierras asignadas a los individuos o a las familias, cumpliendo las condiciones previstas en el artículo 7° de la Ley 70 de 1993 y de acuerdo con el sistema de derecho propio de la comunidad.(...)

9. Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de derecho propio de las comunidades negras.

Artículo 7°. La Junta del Consejo Comunitario. La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás que le asigne el sistema de derecho propio de la comunidad. Sus integrantes son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos por éste. (...)

Artículo 11. Funciones de la Junta del Consejo Comunitario. Son funciones de la Junta del Consejo Comunitario, entre otras, las siguientes. (...)

5. Ejercer el gobierno económico de las Tierras de las Comunidades Negras según sus sistemas de derecho propio y la legislación vigente. (...)

Artículo 32. Manejo y administración. El territorio titulado como Tierras de las Comunidades Negras será manejado y administrado por la Junta del Consejo Comunitario con base en el reglamento interno aprobado por la Asamblea General. La Junta del Consejo Comunitario deberá establecer mecanismos de administración y manejo que garanticen la equidad y justicia en el reconocimiento y asignación de áreas de trabajo para las familias, que evite la concentración de las tierras en pocas manos y que permita un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del cual se benefician todos los integrantes de la comunidad, en cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme se reglamente el Capítulo IV de la ley 70 de 1993.

El reglamento deberá considerar una distribución equitativa de las zonas agrícolas, forestales, mineras y de los recursos hidrobiológicos, respetando las áreas que al momento de la visita sean usufructuadas por cada familia, reservando sectores para adjudicaciones futuras, y cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y el sistema de derecho propio de las comunidades.”

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA APLICACIÓN DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS TERRITORIALES Y PATRIMONIO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS.

La Corte Constitucional, dando cumplimiento a la Sentencia T- 025 de 2004, estableció en los Autos de Seguimiento 004 y 005 de 2009 medidas de protección especiales para los pueblos indígenas y negros, focalizando territorios y comunidades específicas, las cuales deberán ser sujetos prioritarios de los Planes de Salvaguarda Étnica y de Prevención y Atención que el Gobierno Nacional está obligado a formular y desarrollar.

La Orden Quinta del Auto 005/09 dispone la aplicación de la Ruta Étnica de manera obligatoria en todas las situaciones de desplazamiento en territorios de los pueblos negros, cuando se hubiere emitido un informe de riesgo que los involucre, o cuando se estén desarrollando megaproyectos económicos que involucren sus territorios ancestrales

titulados o no y que sean considerados como un factor determinante a tener en cuenta dentro de las afectaciones al derecho fundamental al territorio.

La aplicación de la Ruta Étnica se encuentra dispuesta desde un principio para los pueblos indígenas y negros, como sujetos de especial protección constitucional, y así se mantendrá en atención a la plena correspondencia de los hechos y derechos que afectan y protegen a estos pueblos en situación de desplazamiento interno o en riesgo de ello.

Las órdenes de la Corte Constitucional se dirigen a:

- 1.- Ministerio del Interior y de Justicia.
 - Vice Ministerio del Interior
 - Grupo de Consulta Previa
 - Dirección de Atención a Comunidades Indígenas y Minorías
 - Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afro colombiana y Raizal
- 2.- INCODER.
- 3.- Superintendencia de Notariado y Registro
 - Notarías
- 4.- Ministerio de Agricultura.
- 5.- Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
- 6.- Acción Social.
- 7.- ; Programa Presidencial de DDHH y DIH
- 8.- Defensoría del Pueblo

Adicionalmente, se considera que en razón de sus competencias y funciones también se encuentran involucradas las siguientes instituciones:

- 1.- El Ministerio Público:
 - Procuraduría General de la Nación.
 - Personerías Municipales y Distritales.
- 2.- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
 - Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible
- 3.- Ministerio de Cultura
- 4.- Ministerio de Minas y Energía:
 - INGEOMINAS
 - Agencia Nacional de Hidrocarburos
- 5.- Ministerio de Transportes
- 6.- Ministerio de Defensa
- 7.- Gobernaciones y Alcaldías
- 8.- Otras.

Los procedimientos en los cuales se basa la Ruta Étnica se fundamentan en los siguientes principios constitucionales:

- Supremacía de los derechos fundamentales e inalienables de los pueblos indígenas y negros.
- Prevalencia del derecho sustancial frente al procesal.
- Realización del derecho a la igualdad material, que se traduce en la adopción de políticas y acciones afirmativas con enfoque diferencial a favor de los pueblos indígenas y negros en situación de desplazamiento o en riesgo de ello.
- Competencias institucionales en materia de derechos territoriales y culturales de los grupos étnicos referidas a la protección, la reparación y restitución de dichos derechos.

Con base en estos criterios, el proceso administrativo se efectúa en cuatro momentos dentro de los cuales se desarrollan los procedimientos para hacer efectiva la protección de acuerdo con las necesidades derivadas de la situación de los derechos territoriales afectados y las competencias institucionales. Ellos han sido clasificados como:

1. Presentación, recepción e inscripción de la solicitud en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados - RUPTA.
2. Estudio de la Solicitud e Inscripción en Folio.
3. Activación de mecanismos para la protección de derechos territoriales y el patrimonio de las comunidades étnicas.
4. Proceso permanente de evaluación y seguimiento de avances sobre efectos de mecanismos de protección.

Para llevar a cabo los cuatro momentos propuestos en este proceso administrativo se debe realizar, de manera previa, la Preparación y Aprestamiento de las autoridades y comunidades étnicas afectadas en sus derechos territoriales, así como de las entidades con competencia.

Para efectos de la aplicación de la Ruta Etnica, las entidades con responsabilidades directas en la protección de los derechos territoriales étnicos de acuerdo con sus competencias y funciones, pueden proceder por oficio frente a una solicitud de protección de las comunidades étnicas y/o del Ministerio Público, aun cuando su actuación no sea requerida o coordinadas por otra entidad. Este criterio operativo se plantea en tanto la Ruta Etnica de protección responde a una orden de la Corte Constitucional – orden quinta Auto 005 de 2009-; se basa en la función institucional de acuerdo con la normativa vigente y lo que se propone como procedimiento, es una actuación institucional coordinada y concertada para una mayor efectividad en la protección y la superación del estado de cosas inconstitucional señalados en la Sentencia T-025 de 2004. Esta consideración responde también al criterio de celeridad y economía procesal. (Código contencioso Administrativo, ley 962 de 2005 y Ley 489 de 1998).

Habiéndose cumplido la fecha límite establecida por la Corte Constitucional para la puesta en marcha de la Ruta Etnica⁵, en todos los casos en los que proceda esta medida de protección por solicitud de la comunidad étnica o del Ministerio Público, de acuerdo con el procedimiento propuesto, las siguientes instituciones tendrán la responsabilidad de su aplicación de acuerdo por lo ordenado por la Corte Constitucional: Ministerio del Interior y de Justicia, INCODER, Superintendencia de Notariado y Registro, Ministerio de Agricultura, IGAC y Acción Social.

⁵ De acuerdo con la orden quinta del Auto 005 de 2009, la Corte Estableció el 30 de Octubre de 2009 como la fecha límite para la puesta en marcha de la Ruta Etnica de protección propuesta por el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social.

Resumen – descripción del Procedimiento:

La solicitud de protección de los territorios étnicos puede ser el resultado de acciones comunitarias, promovidas y apoyadas por la institucionalidad responsable de garantizar la realización de estos derechos o de iniciativas de las autoridades étnicas y sus organizaciones en el marco de sus propios procesos.

Para ello es necesario garantizar que las comunidades, sus organizaciones y autoridades tengan el pleno conocimiento y apropiación de la Ruta Étnica, su naturaleza, alcances, procedimientos y efectos.

Por sus competencias, el Ministerio Público y las Direcciones Étnicas del Ministerio del Interior y de Justicia⁶ son los encargados, -en los niveles nacional, regional y local- de diseñar y poner en marcha estrategias de divulgación y capacitación dirigidas tanto a las comunidades y sus autoridades, como a los funcionarios públicos con competencias en torno a los derechos territoriales colectivos étnicos.

A partir de la presentación de la solicitud -que puede ser realizada por las autoridades tradicionales, cabildos indígenas, juntas de consejos comunitarios o de algún integrante de la comunidad afectada- se surte un conjunto de procedimientos específicos, que involucran las actuaciones tanto de las entidades con competencia en los temas de protección, formalización y restitución de los derechos territoriales étnicos, como de las autoridades étnicas y sus comunidades.

La Ruta Étnica de Protección está bajo la responsabilidad directa del Ministerio del Interior y de Justicia a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM, y la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, el INCODER Superintendencia de Notariado y Registro, el IGAC y Acción Social (Corte Constitucional, 2009. Orden Quinta, Auto de Seguimiento No. 005). Sin embargo, para dar cumplimiento a la normatividad vigente y a lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional -Sentencia T-025 de 2004 y sus respectivos Autos de Seguimiento- en torno a la protección de los derechos territoriales de los grupos étnicos, otras entidades estatales deben asumir acciones concretas de su competencia para cumplir dicho fin, a saber: Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personerías Municipales, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Cultura, Ministerio de Transporte, CAR, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y Administraciones Municipales.

Para precisar las áreas y los tipos afectación, se requiere allegar información complementaria como los mapas, registros de las resoluciones de titulación, informes sobre

⁶ Decreto 4530 de 2008, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y de Justicia y se dictan otras disposiciones". Funciones de la Dirección de asuntos de comunidades afro colombianas, raizales y palenqueras"

afectaciones relacionadas con el patrimonio cultural y natural de los territorios, los planes de vida, de etnodesarrollo, uso y manejo de los territorios, entre otros, que serán suministradas por el IGAC, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Superintendencia de Notariado y Registro, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, Ministerio de Cultura y las Administraciones Municipales, las autoridades tradicionales indígenas, cabildos, Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas y Consejos Comunitarios.

En este mismo orden, le corresponde al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura “asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación” (Artículo 7 Ley 1185 de 2008). Para efectos de esta función, la norma también constituye los Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural “los cuales cumplirán respecto del patrimonio cultural del ámbito territorial y de los bienes de interés cultural del ámbito departamental, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, funciones análogas al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural”; (Numeral b, Artículo 12 Ley 1185 de 2008)

Teniendo en cuenta las competencias del Ministerio Público⁷ en la implementación de las garantías para la realización de los derechos humanos individuales y colectivos, las entidades que lo conforman son las encargadas de activar de oficio la Ruta de Protección Étnica en las situaciones que consideren necesarias por motivos de riesgo o desplazamiento.

Ahora bien, el Ministerio del Interior y de Justicia, Direcciones de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, y de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales -en adelante Direcciones Étnicas del MIJ-, son las responsables de tramitar las solicitudes de protección de los territorios étnicos a través de requerimientos de actuaciones ordinarias o preferentes a las instituciones del Estado (y a los organismos privados, si es del caso), en cumplimiento de las acciones o intervenciones que sean necesarias para la protección de los derechos territoriales étnicos en el nivel nacional y regional en correspondencia con la función del MIJ en el Sistema Administrativo del Interior – Decreto 565 de Febrero de 2010- .⁸ De igual manera, hace el seguimiento del proceso de protección del derecho al territorio hasta su culminación. Por lo demás, informa de dichas acciones tanto a las

⁷ Competencias del Ministerio Público para garantías sobre derechos territoriales de grupos étnicos Decreto 262 de 2000 para la Procuraduría General de la Nación y Ley 24 de 1992 Capítulo II Artículo 9 numeral 20 para la Defensoría del Pueblo.

⁸ Decreto 565 de Febrero 22 de 2010 artículo 1: *Sistema Administrativo del Interior*. Organízase el Sistema Administrativo del Interior, con el fin de coordinar las actividades estatales y de los particulares al nivel regional y que están relacionadas con las problemáticas establecidas en el artículo 5° del presente decreto. Artículo 5 numerales 1, 2 y 3; El Sistema Administrativo del Interior tendrá un alcance integral sobre las siguientes problemáticas en el ámbito territorial: i) Articulación regional para promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos. ii) Articulación regional de la atención integral a la población desplazada. iii) Articulación regional de los procesos de igualdad de oportunidades para comunidades y minorías étnicas.

autoridades étnicas como a la Procuraduría General de la Nación, Delegadas para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos o para Asuntos Ambientales y Agrarios.

La Procuraduría General de la Nación, según sus funciones de vigilancia y control (Decreto 262 de 2000, Artículos 5, 8, 26, 31 y 37),⁹ podrá requerir, discrecionalmente, dichas actuaciones a las entidades para el cumplimiento de sus funciones de tal manera que se garantice la protección del patrimonio y los derechos territoriales de los grupos étnicos.

El INCODER es responsable de decidir y actuar de forma preferente para el cumplimiento de los efectos de las medidas de protección, de acuerdo a las necesidades territoriales y de seguridad jurídica: constitución, ampliación, saneamiento, deslinde, aclaración y reestructuración de resguardos indígenas (Decretos 2164 de 1995¹⁰ y titulación colectiva de tierras de comunidades negras (3759 de 2009¹¹). Por su parte, las Direcciones Étnicas del Ministerio del Interior y de Justicia aportan la información basada en los informes de caracterización de dichos pueblos y comunidades (Decreto 1720 de 2008 para pueblos indígenas y 4530 de Noviembre de 2008 para comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras; Artículos 2, 6, 8,10). La información relativa a las autoridades étnicas debe ser suministrada por estas mismas Direcciones tomando en cuenta el Decreto 1745 de 1995 y el Decreto 2164 de 1995, Artículo 2 parágrafo. En caso de duda sobre el carácter y la pertenencia a un pueblo indígena de una colectividad, el INCODER debe solicitar “[...] al Ministerio del Interior la realización de estudios etnológicos con el propósito de determinar si constituye una comunidad o parcialidad indígena, para efectos del cumplimiento de los fines del Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994.” Por concordancia, de igual manera se procede en el caso de las comunidades negras.

⁹ Entre las funciones de las Procuradurías Delegadas relativas a los grupos étnicos señalan según artículos: ARTÍCULO 5. Intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas. ARTÍCULO 8. Ejercer vigilancia sobre los bienes y recursos de la Nación, especialmente sobre las islas, islotes, cayos y morros, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y el patrimonio arqueológico, histórico y cultural, y procurar la adopción inmediata de las medidas que resulten necesarias para su protección por parte de los funcionarios encargados de su custodia y administración. ARTÍCULO 26. Funciones de protección y defensa de los derechos humanos. Las procuradurías delegadas cumplen las siguientes funciones de protección y defensa de los derechos humanos: Numeral 1. Promover, ante las autoridades judiciales y administrativas, el cumplimiento de las normas del orden nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Numeral 4. Llevar un registro actualizado de los hechos constitutivos de violaciones de los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. Numeral 9. Intervenir en las actuaciones administrativas y de policía en las que tengan interés miembros de las minorías étnicas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, los derechos y garantías fundamentales o el patrimonio público. Numeral 10. Interponer las acciones populares, de tutela, de cumplimiento y las demás que resulten conducentes para asegurar la defensa del orden jurídico, en especial las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas.; ARTÍCULO 31. Funciones de intervención judicial en procesos civiles y agrarios. Los procuradores delegados ejercen las siguientes funciones de intervención judicial en procesos civiles y agrarios: Numeral 1. Como Ministerio Público ante la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas.

¹⁰ Por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

¹¹ Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER y se dictan otras disposiciones.

La Superintendencia de Notariado y Registro y, actualmente por delegación, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos como entidades competentes en el Registro de la titularidad sobre la tierra y los territorios, deben actualizar sus sistemas de información para responder a los requerimientos de protección de los territorios étnicos titulados o no.

Es importante señalar que los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; de Minas y Energía; de Agricultura; de Transporte; de Cultura, las Corporaciones Autónomas Regionales, y las Administraciones Municipales, de acuerdo con su misión institucional y a través de la aplicación de los instrumentos jurídicos establecidos, les corresponde atender requerimientos de protección sobre las afectaciones al patrimonio natural y cultural identificadas. (Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural UNESCO 1972; Artículos 1- 4).

Por su parte, las Autoridades Étnicas pueden aportar sus reglamentos internos, los planes de vida y los planes de uso y manejo construidos con las comunidades como instrumentos para el ejercicio del derecho propio y derivados del reconocimiento de la jurisdicción indígena.

Al interior de la Ruta se diferencian los territorios étnicos titulados de aquellos en trámite o sin iniciarlo¹², con el fin de priorizar la formalización de los derechos y reducir el nivel de vulnerabilidad de las comunidades.

Se cuenta con el “Formulario para la presentación de las solicitudes de protección de los derechos territoriales de grupos étnicos afectados a causa del desplazamiento masivo, riesgos por orden público y presencia de mega proyectos e ingreso al Registro Único de Predios y Territorios abandonados –RUPTA–”. Este instrumento incluye un conjunto de variables para la caracterización de las limitaciones y privaciones al ejercicio del derecho al territorio y la identificación espacial de los lugares más afectados dentro del mismo.

Las entidades del Ministerio Público (Defensorías y Procuradurías Regionales) y las Personerías pueden y deben tomar la declaración del solicitante. Según lo ordenado por la Corte Constitucional, el Ministerio Público está habilitado para presentar la solicitud de oficio cuando: (i) se presenten situaciones de desplazamiento masivo; (ii) la Defensoría del Pueblo haya emitido un informe de riesgo que involucre a comunidades étnicas; (iii) en las zonas de desarrollo de mega proyectos económicos de monocultivos, explotación minera, turística o portuaria que involucre territorios ancestrales y que estas actividades se constituyan como un factor de riesgo o desplazamiento; y (iv) los informes y análisis sobre la situación de orden público señalen un riesgo particular para las comunidades étnicas. Las solicitudes deben, en todos los casos, incluir como mínimo la siguiente información:

- Pertenencia Étnica

¹² Ver características según la posesión y ocupación en territorios étnicos incluidos en la tabla N° 1 y relativos a la propiedad colectiva de grupos étnicos, ocupación colectiva de comunidades negras, posesión tradicional de grupos étnicos, Posesión colectiva de grupos étnicos en predios privados.

- Identificación del Solicitante
- Localización e identificación general de los derechos territoriales
- Descripción del territorio y su estado de formalización jurídica
- Construcciones y usos del territorio
- Caracterización de los derechos territoriales de comunidades indígenas y negras afectadas (tipos de afectaciones).

Una vez diligenciado el formulario único de la solicitud de protección realizada ya sea de oficio o por petición de una autoridad o miembro de un grupo étnico, se envía tanto a la Dirección Étnica del MIJ correspondiente como al INCODER nacional. Esta última entidad incluye la información contenida en las solicitudes de protección en el RUPTA¹³. En este Sistema se deben registrar las anotaciones de protección hechas por las ORIP,¹⁴ realizadas en diferentes momentos, en los folios de matrícula de los territorios titulados, así como las anotaciones relacionadas con los procedimientos iniciados y culminados para la constitución, ampliación, saneamiento, deslinde, aclaración y reestructuración de resguardos indígenas, y titulación colectiva de tierras de comunidades negras.

La información contenida en el Módulo Étnico del RUPTA debe hacer parte del sistema de información del la Superintendencia de Notariado y Registro. Por lo demás, la información recolectada en las solicitudes de protección de los derechos territoriales de los grupos étnicos debe ser consignada en la base de datos del Ministerio del Interior y de Justicia, ya que ésta sirve como insumo para la caracterización de los grupos étnicos, ordenada por la Corte Constitucional.

El seguimiento al proceso de protección de los derechos territoriales étnicos es una actividad permanente, en donde la Procuraduría General de la Nación –PGN- tiene un papel preponderante, al igual que la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría General de la Nación debe garantizar la eficiencia y eficacia del procedimiento por cada una de las entidades con competencia según sus requerimientos. El no cumplimiento de la función pública con relación a los mandatos constitucionales en materia de protección de los derechos y libertades fundamentales de los grupos étnicos relacionados con el territorio, de acuerdo con lo establecido en este mecanismo de protección, será revisado por la Procuraduría General de la Nación quien podrá remitir, de ser necesario, a la Fiscalía General de la Nación para su actuación.

¹³ Para efectos de la protección y reparación integral del derecho fundamental al territorio, es necesario formular y operar vínculos concretos entre el RUPTA y otros sistemas de información como el Sistema de Información Institucional de Justicia y Paz SIIJYP, el Sistema de Información de Población Desplazada SIPOD, las Bases de datos sobre territorios étnicos titulados y en trámite de titulación (Declarada inconstitucional la Ley 1152 en retorno al Incoder desde la UNAT y El Ministerio del Interior y de Justicia – Direcciones de Asuntos de comunidades indígenas y negras), Vigencia de autoridades étnicas y censos de población en resguardos y territorios colectivos del MIJ - Direcciones de comunidades indígenas y negras, así como, las bases de datos sobre hechos de víctimas de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.

¹⁴ Códigos de anotación ORIP: 0474 prohibición de enajenar o transferir derechos sobre bienes conforme a lo previsto en la ley 1152 de 2007; 0927 Medida de Protección sobre predio declarado en abandono por causa de la violencia por poseedor, ocupante o tenedor no inscrito; 470 prevención registradores abstenerse de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título de bienes rurales, decreto 2007 de 2001; 0352 declaratoria de zonas de inminencia de riesgo de desplazamiento y de desplazamiento forzado; 0353 declaratoria de zona de desplazamiento forzado; 839 cancelación declaratoria zona de riesgo inminente de desplazamiento; 840 cancelación declaratoria zona de desplazamiento forzado.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, debe ejercer las competencias dispuestas en el artículo 282 de la Constitución y en las Leyes 4ª y 24 de 1992.

Le corresponde a Acción Social hacer seguimiento a la Ruta Étnica y de acuerdo con la Sentencia T- 821 de 2007, certificar el cumplimiento institucional (Auto 008 de 2009).

El seguimiento y evaluación busca corregir o ajustar de manera oportuna y eficaz los mecanismos e instrumentos de acuerdo con la eficacia de los efectos. Es su propósito alcanzar los efectos buscados con las medidas de protección de manera oportuna y eficaz.

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA RUTA ÉTNICA DE PROTECCIÓN:

Se han identificado cuatro pasos, con un momento precedente que además tiene la característica de ser permanente, el cual consiste en la preparación de las comunidades étnicas en torno a los procedimientos de protección, así como al Ministerio del Interior – Direcciones Étnicas- y al Ministerio Público para que les brinden acompañamiento y faciliten el acceso efectivo a la Ruta.

La Ruta Étnica vela por la aplicación de procedimientos que garanticen un acompañamiento efectivo a las comunidades étnicas en la salvaguarda de sus derechos fundamentales al territorio y al patrimonio. Se inicia con la identificación de los territorios y sus afectaciones para que las entidades y las autoridades étnicas determinen las situaciones de limitaciones, privaciones y usurpaciones. La activación de mecanismos de protección del territorio y el patrimonio (Paso 3), se convierte en un momento decisivo para hacer efectiva protección de los derechos afectados, a partir de la garantía de la eficiente actuación de las entidades competentes.

La evaluación y seguimiento, como procesos permanentes (Paso 4), velan por que la protección además de efectiva sea sostenible para estos sujetos colectivos de derechos.

Preparación y aprestamiento de las autoridades y comunidades étnicas afectadas en sus derechos territoriales para la aplicación de la Ruta Étnica, así como de las entidades con competencia.

Descripción y alcance

La presentación efectiva de la solicitud de protección depende de la apropiación que tengan las comunidades étnicas, sus autoridades y organizaciones de la naturaleza, procedimientos y efectos de esta medida. En este sentido, es necesario garantizar que las comunidades negras e indígenas afectadas cuenten con la información oportuna, clara y precisa sobre la

misma, así como con la preparación suficiente para ejercer de manera consciente, libre y expresa su derecho a participar en la aplicación de estos mecanismos para la protección de sus derechos territoriales.

De igual manera, la atención oportuna y el compromiso institucional con el desarrollo de este procedimiento depende del conocimiento y apropiación que tengan las entidades públicas del nivel local, regional y nacional acerca de sus competencias y el papel a jugar en las situaciones que dan lugar a este mecanismo de protección, ello requiere de un amplio proceso de capacitación a las entidades en torno a la Ruta de Protección y de la adecuación institucional a nivel de recursos humanos, técnicos, económicos e informáticos.

Se espera que el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio Público, el INCODER, las gobernaciones, las alcaldías municipales y los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada promuevan y realicen un proceso amplio de divulgación y capacitación en el cual participen las autoridades étnicas, facilitándose así el intercambio y valoración del contexto local para la apropiación del mecanismo de protección.

Procedimiento

PROCESO PERMANENTE DE PREPARACIÓN Y APRESTAMIENTO	
<i>¿Quién es el responsable?</i>	<ul style="list-style-type: none"> El Ministerio Público (Personerías, Procuradurías Regionales y Provinciales y Defensoría del Pueblo) Ministerio del Interior y de Justicia (Direcciones de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM y de Asuntos para Comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras) Acción Social
<i>Qué entidades pueden apoyar?</i>	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Territoriales del nivel departamental y municipal¹⁵. Autoridades y líderes de comunidades étnicas.
<i>¿Cómo se hace?</i>	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación de las entidades concernidas en la Ruta por parte del Ministerio Público y Ministerio del Interior y de Justicia – Direcciones de Asuntos Indígenas y Comunidades Negras. Diseño y aplicación de una estrategia de divulgación y capacitación para autoridades y comunidades indígenas y negras. Identificación de territorios étnicos susceptibles para la protección de derechos territoriales afectados por la violencia como prioridad para desarrollo de campaña de divulgación y capacitación¹⁶. Acercamiento a las autoridades de las comunidades afectadas. Construcción de un plan de divulgación y capacitación relacionado con la medida de protección. Llevar un registro de las autoridades y organizaciones capacitadas por zonas para evaluar el porcentaje de cumplimiento de esta actividad, de acuerdo con el inventario de comunidades reportado por el MIJ. Desarrollo de estrategias pedagógicas y comunicativas adecuadas a estas sociedades orales, con baja escolaridad y medianas competencias en lectoescritura, que les

¹⁵ En este proceso, cobra particular relevancia el papel de las Secretarías encargadas de promover la participación de las autoridades y comunidades étnicas, entre estas Secretarías de convivencia, de participación comunitaria y de asuntos étnicos.

¹⁶ La identificación de los territorios étnicos afectados se tendría como ámbito prioritario de actuación en los territorios étnicos localizados por la Honorable Corte Constitucional en los Autos 004 y 005 de 2009.

PROCESO PERMANENTE DE PREPARACIÓN Y APRESTAMIENTO	
	<p>permitan acceder a la información y cualificar el conocimiento sobre sus derechos territoriales para el logro de la participación activa de las comunidades y autoridades de los Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios en la formulación, aplicación y exigibilidad de los mecanismos de protección, formalización y restitución de sus derechos territoriales.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En cuanto a la institucionalidad debe considerar las competencias de cada entidad, su papel y el momento en que interviene en el procedimiento y seguimiento de la Ruta. ▪ Propiciar espacios tanto autónomos de las comunidades como mixtos con la participación de la institucionalidad.
¿De qué herramientas se dispone?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modelo de convocatoria a las autoridades y comunidades para la socialización de la Ruta Étnica ▪ Guía para la socialización y capacitación sobre la medida de protección
¿Cuándo se debe adelantar?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De manera permanente. ▪ Con carácter preventivo cuando se identifiquen situaciones de riesgo de vulneración de los derechos territoriales. ▪ Con prioridad cuando se identifiquen territorios étnicos con afectación de los derechos territoriales. ▪ Cuando exista una demanda por parte de entidades del nivel local o autoridades e integrantes de comunidades étnicas.
¿Cuáles son los contenidos básicos de la divulgación y capacitación?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Información relativa al alcance, procedimientos y efectos de la Ruta Étnica. ▪ Herramientas conceptuales, metodológicas y fuentes de información para la identificación y caracterización de los derechos territoriales étnicos: <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de contexto, criterios para la caracterización de las afectaciones, limitaciones o privaciones a los derechos territoriales - Fundamentos normativos - Definición - Principios y requisitos - Ámbito de aplicación - Instituciones con competencia y rol que desempeñan en el procedimiento de protección. - Mecanismos para la protección jurídica del patrimonio natural y cultural de los territorios. - Efectos de la medida.
¿Qué resultados se esperan?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funcionarios públicos capacitados en la aplicación de la medida de protección y el acompañamiento a las comunidades. ▪ Cualificación y aprestamiento de las comunidades respecto a los alcances, carácter y efectos de la Ruta Étnica. ▪ Adecuada coordinación interinstitucional para la aplicación de la medida. ▪ Inicio de un proceso de aplicación masiva de la medida de protección de derechos territoriales étnicos.
¿Quién hace el seguimiento a este proceso de aprestamiento?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direcciones Étnicas del MIJ. ▪ El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y las Procuradurías Delegadas Ambiental y Agraria, y la Preventiva de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. (Decreto 262 de 2000). ▪ Acción Social en su calidad de coordinadora del SNAIPD, de acuerdo al Auto 008 de 2009. ▪ Autoridades y organizaciones étnicas.

El ejercicio de aprestamiento de las comunidades, sus autoridades y organizaciones debe considerarse desde un enfoque de diálogo intercultural entre la institucionalidad, los grupos

étnicos y otras comunidades. Ello debe contribuir al fortalecimiento de la gobernanza propia de sus territorios, al entendimiento de sus lógicas de vida por parte de la sociedad campesina u otras sociedades, y a la efectiva coordinación con las administraciones locales y regionales.

La preparación y el aprestamiento de las comunidades para la aplicación de la Ruta de Protección de los Derechos Territoriales Étnicos está sujeta a la formulación y puesta en marcha, por parte del Ministerio Público y las Direcciones Étnicas del MIJ, de una estrategia pedagógica y comunicativa adecuada culturalmente de tal manera que les permitan acceder a la información y cualificar el conocimiento sobre estos derechos y los mecanismos de protección, formalización y restitución. Adicionalmente, los temas y metodologías a trabajar serán sometidos a concertación, priorizando aquellos que además de aportar a la aplicación de las medidas fortalezcan las capacidades de ordenamiento, manejo y administración de sus territorios.

Otro propósito perseguido durante este paso es potenciar los conocimientos y mecanismos propios de protección de derechos territoriales practicados por las comunidades que en algunos casos están plasmados en sus reglamentos internos y sus planes de vida.

Importante

Con el fin de establecer la prioridad de las comunidades y autoridades a contactar para el proceso permanente de preparación y aprestamiento, se deben tomar en cuenta aquellas que presentan vulneración a sus derechos territoriales por limitaciones, privación, daño u otros impactos identificados a partir del cruce entre territorios y riesgo de afectación por desplazamiento, riesgo por orden público y por la construcción/operación de mega proyectos económicos de monocultivos, explotación minera, turística o portuaria.

Es necesario tener en cuenta las diferentes modalidades de desplazamiento identificadas en la Directriz para la Prevención y Atención Integral de la Población Indígena en Situación de Desplazamiento y Riesgo con Enfoque Diferencial expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia en octubre de 2006 (desplazamiento interno, externo, transfronterizo, urbano, etc.).

Para hacer efectiva la participación de las comunidades étnicas y sus autoridades, el Ministerio del Interior y de Justicia deberá suministrar al Ministerio Público toda la información correspondiente y prestará el apoyo para la convocatoria de estas comunidades. Una vez identificados los nombres e información domiciliaria de las autoridades étnicas relacionadas, las dependencias correspondientes del Ministerio Público y del Ministerio del Interior deberán establecer un contacto directo con estas autoridades con el fin de acordar un plan de trabajo para adelantar la estrategia de divulgación y capacitación sobre la Ruta Étnica.

PASO 1. Presentación, recepción e inscripción de la solicitud en el RUPTA

1.1. Descripción y alcance

La presentación de las Solicitudes de Protección de los Derechos Territoriales de Grupos Étnicos Afectados puede adelantarse cuando se presentan hechos violatorios ocasionales o sistemáticos que originen o hayan originado la afectación de tales derechos por causa de la violencia, el desplazamiento forzado, el riesgo de desplazamiento y/o el confinamiento, por la construcción y/u operación de mega proyectos económicos de monocultivos, explotación minera, turística o portuaria que representen o conduzcan violaciones o posibles violaciones a los derechos de los grupos étnicos, especialmente lo relativo a supervivencia física y cultural, al detrimento de sus intereses, a sus planes de ordenamiento, planes de vida o reglamentos internos, al derecho a la Consulta Previa, entre otros.

La presentación de dichas solicitudes inicia el procedimiento administrativo de la Ruta Étnica.

Las solicitudes de protección por esta Ruta pueden ser presentadas por las autoridades étnicas como por representantes de la comunidad o, de oficio por parte del Ministerio Público. Adicionalmente, los miembros de la comunidad afectada pueden presentar la solicitud cuando las circunstancias impidan que sus representantes y/o autoridades tradicionales la realicen.

El principal alcance de este primer paso es el ingreso de la Solicitud de Protección al Registro Único de Predios y Territorios Abandonados –RUPTA, por parte del INCODER. Con dicho registro se pretende fortalecer y cualificar los sistemas de información institucional en relación con la violencia y otras afectaciones a los derechos territoriales colectivos de los grupos étnicos. Se espera que los Sistemas de Atención Integral para la Población Desplazada –SNAIPD-, incluyan la identificación de las necesidades específicas de esta población con mayor nivel de vulnerabilidad, como los grupos étnicos.

Por lo demás, es necesario resaltar aquí que la información sobre las tipologías de afectación o limitaciones al derecho fundamental al territorio NO deben limitarse exclusivamente a su registro en el RUPTA, sino que es preciso que alimenten la base de datos de las diferentes entidades con competencia en la aplicación de la Ruta Étnica, en especial a la del Ministerio del Interior y de Justicia – Direcciones de Asuntos Indígenas y Comunidades Negras -.

1.2. Matriz de Procedimiento

PRESENTACIÓN , RECEPCIÓN Y ENVÍO DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN E INGRESO AL RUPTA	
¿Quién es el responsable de la recepción de la solicitud?	<ul style="list-style-type: none"> El Ministerio Público (Personerías, Procuradurías Regionales y Provinciales y Defensoría del Pueblo)¹⁷.
¿Cuáles son los requisitos mínimos para la presentación de la solicitud de protección de derechos territoriales étnicos?	<ul style="list-style-type: none"> Que la solicitud sea presentada por : <ul style="list-style-type: none"> ≠ La autoridad tradicional indígena¹⁸, el representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas -AATI- o el gobernador de cabildo del resguardo indígena¹⁹ y las demás que ellos reconozcan como sus autoridades. ≠ El representante legal del Consejo Comunitario o de la comunidad negra organizada del nivel local de otras formas colectivas de propiedad territorial (asociaciones campesinas de comunidad negra por Ley 160). ≠ La junta de un Consejo Comunitario de comunidades negras²⁰ ≠ Un representante de las instancias organizativas de segundo nivel o autoridades reconocidas por el consejo comunitario o de organizaciones de comunidad negra por Ley 160. ≠ Un integrante de la comunidad negra o indígena cuando existan circunstancias que impidan que los representantes legales de su territorio lo hagan o cuando a causa del desplazamiento se encuentren por fuera del territorio. ≠ De oficio el Ministerio Público <ul style="list-style-type: none"> o Personerías municipales. o Defensorías del Pueblo (Regionales y Seccionales) o Procuraduría General (Delegadas, Regionales, Provinciales y las Procuradurías Delegadas para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y para Asuntos Ambientales y Agrarios). Que la tierra a proteger haga parte de un territorio tradicional, resguardo indígena o territorio colectivo de comunidades negras . Que los derechos territoriales étnicos a declarar estén afectados por: <ul style="list-style-type: none"> ≠ Violencia y/o desplazamiento. ≠ Proyectos económicos, explotación de recursos naturales, monocultivos, explotación minera, turística o portuaria.
¿Cómo se hace?	<ul style="list-style-type: none"> Mediante solicitud verbal o escrita presentada de manera particular ante el Ministerio Público (Personerías, Defensorías, Procuradurías). Mediante solicitud verbal o escrita presentada de manera grupal ante el Ministerio Público (Personería, Defensoría y Procuraduría) o INCODER regional como resultado de procesos participativos autónomos o propiciados por las entidades

¹⁷ Resoluciones o circulares de la Procuraduría General de la Nación

¹⁸ Son miembros de una comunidad indígena que ejercen un poder de organización, gobierno, gestión o control social y cultural, entre estos: mamos, capitanes, caciques, cabildos gobernadores, taitas, chamanes, etc.

¹⁹ El cabildo es una entidad pública de carácter especial cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad y el territorio, ejercer autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad, dicha figura es contemplada en la Ley 89 de 1890. Existen cabildos mayores y menores, en todo caso la autoridad recae en el gobernador de cabildo.

²⁰ Persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales, legales que los rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad. El consejo comunitario lo integran la Asamblea General y la Junta del Consejo de conformidad con la Ley 70 de 1993.

PRESENTACIÓN , RECEPCIÓN Y ENVÍO DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN E INGRESO AL RUPTA	
	<p>competentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediante solicitud presentada de oficio por las entidades del Ministerio Público (Personerías, Procuradurías Regionales y Provinciales, y Defensoría del Pueblo).
¿De qué herramientas se dispone?	<ul style="list-style-type: none"> Formulario único de solicitud de protección de los derechos territoriales de grupos étnicos afectados a causa de la violencia y/o desarrollo de mega proyectos productivos de monocultivos, minería, turísticos o portuarios y su ingreso al RUPTA Modelo de oficio remitido de la solicitud de protección a las entidades con competencia Anexos de información entregados por las comunidades Anexos de información entregados por las instituciones. Formato de lista de chequeo para estudiar la solicitud de protección Guía para la identificación de derechos territoriales étnicos vulnerados Tabla de conceptos de la propiedad, posesión y ocupación de los territorios
¿Cuándo se debe adelantar?	<ul style="list-style-type: none"> Cuando las comunidades manifiesten que sus territorios pueden estar en riesgo Cuando en un área o en la totalidad del territorio étnico se han presentado hechos violatorios ocasionales o sistemáticos de este derecho fundamental (desplazamiento forzado, confinamiento, usurpación, restricción a la libre circulación o la limitación al uso de caminos y ríos, privación para realizar actividades de cacería, pesca, recolección o agricultura por la presencia de actores armados ilegales, proyectos económicos, obras de infraestructura, o de amenazas a su integridad personal/secuestros, reclutamientos forzados, entre otros, de conformidad con los Autos 004 y 005 de 2009 de la Corte Constitucional)²¹. Cuando las autoridades municipales, departamentales, entidades y organizaciones de autoridades étnicas u ONG, con base en información sustentada, demandan del Estado actuaciones para la protección de la integridad territorial étnica. Cuando exista un reporte del Ministerio Público sobre riesgos y/o afectaciones a los derechos territoriales o Informe PPDDHH y DIH.
¿Qué información contiene la solicitud?	<ul style="list-style-type: none"> El formulario tiene ocho capítulos y un anexo con información relativa a: <ul style="list-style-type: none"> Pertenencia Étnica Identificación del Solicitante Localización e identificación general de los derechos territoriales Descripción del territorio Construcciones y usos del territorio Caracterización de los derechos territoriales de comunidades indígenas y negras afectadas por la violencia o la presencia de mega proyectos Verificación del procedimiento Los contenidos propios de los informes de riesgo y los que contienen información sobre la violación del derecho fundamental al territorio.
¿Cuándo y a qué entidades se les envía la solicitud?	<p>Recepción de la solicitud, el Ministerio Público²² (Defensoría, Personería y Procuraduría) Posteriormente se remite junto con los anexos correspondientes al INCODER de nivel nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> El INCODER verifica los requisitos de la solicitud e ingresa inmediatamente después de la recepción la solicitud en el Registro de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA con base en su propia información. El INCODER solicita a las Direcciones Étnicas del MIJ el registro y vigencia de autoridades y la pertenencia al territorio de los peticionarios, y envía copia de la solicitud de protección. Las Direcciones Étnicas del MIJ inician revisión de la información de caracterización

²¹ La ocurrencia de estos hechos puede haber sucedido en cualquier tiempo (principio de no prescripción).

²² Decreto en formulación.

PRESENTACIÓN , RECEPCIÓN Y ENVÍO DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN E INGRESO AL RUPTA	
	de las afectaciones.
¿Para qué o con qué fines se realiza este paso?	<ul style="list-style-type: none"> • Ingreso de la Solicitud al RUPTA • Dar inicio al procedimiento administrativo de protección. • Identificar preliminarmente las entidades que deben suministrar información. • Identificar preliminarmente las entidades que deben ser requeridas para su actuación.
¿Quién debe hacer seguimiento a la acción institucional desarrollada?	<ul style="list-style-type: none"> • El Ministerio del Interior y de Justicia, Direcciones Étnicas, en su calidad de coordinador de este procedimiento administrativo. • El Ministerio Público, en cumplimiento de su mandato legal y constitucional de vigilancia, control y seguimiento, particularmente las Procuradurías Ambiental y Agraria y para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos; y la Defensoría del Pueblo. • Acción Social en su calidad de coordinadora del SNAIPD, para efectos de la certificación a las entidades – Sentencia T- 821 de 2007-. • Autoridades y organizaciones étnicas

1.3. Procedimiento

1.3.1 Requisitos para la presentación de la solicitud de protección de los territorios étnicos

- La solicitud debe ser presentada por :
 - La autoridad tradicional indígena, el representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas – AATI o el gobernador de Cabildo del Resguardo Indígena. y las demás que ellos reconozcan como sus autoridades.
 - El representante legal del Consejo Comunitario o de la comunidad negra organizada del nivel local de otras formas colectivas de propiedad territorial (asociaciones campesinas de comunidad negra por Ley 160).
 - Un representante de las instancias organizativa de segundo nivel o autoridades reconocidas por el consejo comunitario o de organizaciones de comunidad negra por Ley 160.
 - La junta de un Consejo Comunitario de comunidades negras.
 - Un integrante de la comunidad negra o indígena cuando existan circunstancias que impidan que los representantes legales de su territorio lo hagan o cuando a causa del desplazamiento se encuentren por fuera del territorio.
 - De oficio por el Ministerio Público.
 - ✓ Personerías municipales.
 - ✓ Defensorías del Pueblo (Regionales y Seccionales).
 - ✓ Procuraduría General (Delegadas, Regionales, Provinciales y Judicial Ambiental y Agraria y Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos).
- Es indispensable que la tierra a proteger haga parte de un resguardo indígena, un territorio tradicional o ancestral sin titulación, un territorio colectivo de comunidades negras y posesiones de comunidades étnicas en predios privados.

- Es necesario que los derechos territoriales étnicos hayan sido, estén o puedan estar afectados por la violencia, por mega proyectos económicos, explotación de recursos naturales renovables y no renovables o proyectos de infraestructura.
- Cuando miembros de la comunidad étnica son propietarios o poseedores a título individual por fuera del territorio colectivo o tradicional estos podrán acceder a la protección de su predio por Ruta Individual sin detrimento de su carácter de integrante de un grupo étnico.

1.3.2 Presentación de la solicitud de protección de los derechos territoriales étnicos

- Tal y como se ha observado, la solicitud de protección de los derechos territoriales de los grupos étnicos afectados debe ser presentada de manera preferencial, por el titular de los derechos, es decir, la comunidad indígena o negra, sus autoridades (representante del Consejo Comunitario de comunidades negras o de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas, cabildo indígena o autoridad tradicional, entre otras) o, por integrantes de la comunidad cuando la autoridad no pueda hacerlo o se encuentren desplazados fuera del territorio, en situación de confinamiento o amenaza.
- La solicitud puede ser presentada por el Ministerio Público si dadas las circunstancias de riesgo y/o amenazas la etnia, comunidad o pueblo afectado no está en condiciones de presentarla siendo deseable una valoración previa de la situación que constate dicho impedimento -ver actuaciones de oficio-.
- La solicitud debe ser presentada de manera verbal o escrita ante el Ministerio Público (Personerías municipales, Defensorías del Pueblo -Regionales y Procuraduría General de la Nación -Delegadas, Regionales, Provinciales).
- Se recomienda al INCODER emplear el Formulario Único de Solicitud de Protección de los Derechos Territoriales de Grupos Étnicos para su Ingreso al Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA.
- Metodológicamente se propone que el Ministerio Público diligencie un formulario por territorio étnico, preferiblemente como resultado de las actividades de preparación y aprestamiento de las comunidades, quienes podrán aportar por comunidad la información que consideren pertinente para complementar los hechos descritos en la solicitud de la medida de protección sin que ello implique una visión fragmentada de la situación territorial porque esta medida responde a un enfoque integral de protección.
- En caso de que el funcionario del Ministerio Público (de nivel local o regional) que recibe la solicitud no cuente con el Formulario Único, dicha información podrá ser consignada en un documento firmado por el Ministerio Público, y por el solicitante.

1.3.3 Formulario de solicitudes de protección para territorios étnicos

El Formulario de la Solicitud de Protección busca poner en marcha un proceso de protección de los derechos territoriales mediante la recepción de una información sobre

situaciones de amenazas, riesgos o afectaciones en el que se describe de manera preliminar las limitaciones y privaciones al ejercicio del derecho fundamental al territorio.

El Formulario para la recepción de las solicitudes de protección tiene ocho capítulos y un anexo, descritos a continuación:

- **Pertenencia Étnica:** Auto reconocimiento del solicitante como negro o afro colombiano, raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia, Palenquero o indígena.
- **Identificación del Solicitante:** Nombre e identificación de la Autoridad étnica, integrante de grupo étnico o funcionario del Ministerio Público.
- **Localización e identificación general de los derechos territoriales:** Nombre y jurisdicción político administrativa y regional del territorio étnico.
- **Descripción del territorio:** (i) resguardos indígenas, (ii) tierras colectivas de comunidades negras, (iii) tierras comunales, entre éstas reservas indígenas, (iv) territorios tradicionales o ancestrales, (v) trámites de titulación, ampliación, saneamiento, reestructuración y aclaración de títulos a favor de comunidades indígenas y negras, (vi) posesiones de grupos étnicos en predios privados, (vii) tierras privadas de propiedad de la comunidad o integrantes de la misma con destino a la titulación colectiva.
- **Usos y construcciones del territorio:** Especificación de lugares de uso familiar y colectivo, así como de las principales actividades productivas y de protección ambiental. Identificación de la existencia de instrumentos para el ordenamiento y el manejo territorial (Planes de Vida, Planes de Uso y Manejo, Reglamentos Internos).
- **Identificación preliminar de las afectaciones del derecho fundamental al territorio:** Se trata de determinar, hasta donde sea posible, sus tipologías, los responsables de las violaciones y dar cuenta de manera precisa de las familias, comunidad o comunidades afectadas, y en ellas, los lugares y tipos de limitaciones a las actividades, (individuales y colectivas) desarrolladas en espacios como:
 - ≠ Viviendas
 - ≠ Lugares de uso comunitario: bosques, ríos, lugares sagrados, rozas, cultivos, caminos, trochas, etc.
 - ≠ Casas comunales y de autoridades étnicas.
 - ≠ Zonas de aprovechamiento de recursos naturales
 - ≠ Fuentes de agua, recursos forestales.
- **Verificación de presentación del formulario:** Se debe revisar el procedimiento de presentación del formulario de solicitud para comprobar que su información esté completa y correctamente consignada y que ésta haya sido suministrada por una autoridad étnica o un integrante de una comunidad o que haya sido el resultado del proceso de aprestamiento. También se debe revisar que se incluyan los anexos entregados por la comunidad en los talleres de aprestamiento o por el solicitante en las oficinas del Ministerio Público o el INCODER del ámbito local o regional (los anexos no son obligatorios). Estas entidades podrán aportar información complementaria a la solicitud, la cual también debe ir como anexo. Es muy importante que se verifique la

firma y huella del solicitante, el nombre del funcionario y dejar constancia de las enmendaduras en que se incurrió.

Actuaciones de oficio

Ministerio Público

El Ministerio Público puede, de acuerdo con sus competencias, y con las órdenes de los Autos de Seguimiento 004 y 005 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional²³, solicitar de oficio la protección de los derechos territoriales étnicos afectados, y su inclusión en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados –RUPTA. Las dependencias pertinentes para adelantar la presentación de las solicitudes de protección de territorios étnicos son la Defensoría del Pueblo, las Procuradurías Regionales y Provinciales, y las Personerías municipales.

Otras de las situaciones en las que se espera que el Ministerio Público actúe de oficio es cuando existen impedimentos o riesgo para que las autoridades e integrantes de la comunidad presenten directamente la solicitud de protección o cuando sea imposible el acercamiento del Ministerio Público a las comunidades en la fase de aprestamiento, para lo cual se encargará de actuar oficiosamente para dar inicio al procedimiento de protección de los derechos territoriales de las comunidades étnicas.

Una vez recibida la Solicitud de Oficio por parte del INCODER nacional se surte el mismo procedimiento señalado para las solicitudes realizadas por las autoridades, representante o miembros de los pueblos indígenas y negros cuyo derecho fundamental al territorio haya sido afectado. Es importante señalar que las Direcciones Étnicas del Ministerio del Interior y Justicia al recibir la petición de información y la remisión de la copia de solicitud se lleva a cabo la revisión preliminar de la información en torno a la caracterización de las afectaciones relacionadas con la violencia, desplazamiento, construcción y/u operación de mega proyectos económicos de monocultivos, explotación minera, turística o portuaria, entre otras vulneraciones al territorio. Al término de los XX de recepcionada este tipo de solicitud, la dependencia en cuestión define y envía los requerimientos a las diferentes entidades con competencia, según sea el caso. Dichas Direcciones deben informar a la Procuraduría Delegada para asuntos ambientales y Agrarios o a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos para que éstas decidan el tipo de procedimientos de vigilancia y control a que haya a lugar.

Para la presentación de oficio de las solicitudes de protección de territorios étnicos, el Ministerio Público puede basarse en su propia información relacionada con violaciones al derecho fundamental al territorio, contenida en investigaciones, Informes de Riesgo, Resoluciones Defensoriales (audiencias), así como en las quejas recibidas de las

²³ Corte Constitucional. Auto de Seguimiento 005 de 2009. “(...) La aplicación de esta ruta será obligatoria en situaciones de desplazamiento masivo, cuando la Defensoría del Pueblo haya emitido un informe de riesgo que involucre comunidades afro colombianas, así como en las zonas de desarrollo de proyectos de monocultivos, explotación minera, turística o portuaria que involucre territorios ancestrales. Igualmente, esta ruta de protección deberá ser aplicada cuando los informes y análisis de las autoridades sobre la evolución de la situación de orden público señalen un riesgo particular para las comunidades afro colombianas en determinadas regiones (...).”

comunidades étnicas afectadas, entre otras. De manera especial, se recomienda tener en cuenta la información contenida en las medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los fallos de la Corte Interamericana relacionados con grupos étnicos en el país.

1.3.4 Envío de la solicitud al INCODER nivel nacional

El Ministerio Público, inmediatamente después de su recepción, debe enviar las solicitudes de protección y los anexos correspondientes que se presenten en sus dependencias al INCODER nacional. El INCODER de nivel nacional, con base en la información de la solicitud, la suya propia y la enviada por las Direcciones Étnicas del MIJ, según sea el caso, la ingresa al Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA.

Todas las actuaciones llevadas a cabo por el INCODER serán informadas a la Procuraduría General de la Nación, Delegada Preventiva en Materia de DDHH y Asuntos Étnicos y serán dadas a conocer a las autoridades y/o representantes de la comunidad étnica.

Importante.

- ≠ Conocimiento por parte de los funcionarios locales y regionales de los derechos y normatividad especial de grupos étnicos, particularmente la relacionada con el territorio.
- ≠ Los funcionarios encargados de la recepción de la solicitud deben observar respeto por los contextos socioculturales de las comunidades y sus representantes y, en esa medida, facilitan el diálogo intercultural en la identificación y la caracterización de los territorios.
- ≠ Respeto a las tradiciones de cada pueblo (lenguas, costumbres, organizaciones, uso de traductor de ser necesario) en el acompañamiento para que visibilicen las situaciones de los derechos territoriales.
- ≠ El reconocimiento de las autoridades de los grupos étnicos, como representantes de los derechos patrimoniales, es necesario para dar vigencia a los derechos colectivos, en especial al derecho fundamental al territorio.
- ≠ El Ministerio Público, y las Direcciones Étnicas del Ministerio del Interior y de Justicia deberán facilitar los recursos y mecanismos para la participación a las autoridades étnicas en la presentación de las solicitudes de protección.
- ≠ Para poder cumplir con los objetivos de la Ruta Étnica se requiere con urgencia incluir las variables relacionadas con la identificación y caracterización de los derechos territoriales étnicos en el RUPTA por parte del INCODER.
- ≠ El ingreso de variables relacionadas con la identificación y caracterización de los derechos territoriales étnicos en el RUPTA y los demás sistemas de información interinstitucionales, son fundamentales en términos de prueba pública y/o judicial de la violación de los derechos.
- ≠ La visibilización de estas afectaciones contribuye a la generación de conciencia colectiva de la problemática en la sociedad colombiana.

- ≠ Tener en cuenta en las acciones de aprestamiento la aplicación de las guías para la caracterización identificación de los derechos vulnerados que se presenta a en las siguientes páginas:

Tabla 1: Guía para la caracterización de la Propiedad, Posesión, Ocupación y Áreas de Uso de territorios étnicos.

	Definición	Calidad del sujeto	Prueba de calidad
Propiedad colectiva de grupos étnicos	<p>La propiedad colectiva de grupos étnicos es la que está en cabeza de una comunidad étnica reconocida por la Constitución y la Ley a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Negras, ejercida sobre áreas determinadas del territorio nacional en las que habitan o realizan sus actividades sociales, económicas y culturales.</p> <p>Son las Reservas indígenas otra forma de propiedad colectiva, se definen como un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas, delimitado y legalmente asignado por el INCORA a aquéllas para que ejerzan en él los derechos de uso y usufructo con exclusión de terceros. Estos constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución.</p>	La comunidad étnica es titular del derecho fundamental al territorio, en tanto sujeto colectivo de derechos que tiene personalidad jurídica, lo que le permite su exigibilidad a través de la tutela y otras acciones judiciales y administrativas.	<p>Es el título consignado en un documento mediante el cual, de acuerdo a la evolución histórica y normativa, la autoridad competente reconoce la propiedad sobre un área determinada del territorio nacional a las comunidades indígenas y negras.</p> <p>≠ <i>Resguardo indígena</i></p> <p>a. Resolución de constitución</p> <p>b. Título colonial y/o cédula real</p> <p>c. Otros documentos.</p> <p>≠ <i>Tierras colectivas de las comunidades negras</i></p> <p>a. Resolución de adjudicación</p> <p>b. Cédulas Reales</p> <p>c. Otros documentos como registros históricos de manumisión</p> <p>≠ <i>Reserva Indígena:</i></p> <p>a. Resolución de constitución del INDERENA o el INCORA.</p>
Posesión tradicional de grupos étnicos	Art. 14 Num 1. Conveio 169 de 1989 de la OIT. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Adicionalmente, “La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la	La comunidad étnica es titular del derecho fundamental al territorio, en tanto sujeto colectivo de derechos que tiene personalidad jurídica, lo que le permite su exigibilidad a través de la tutela y otras acciones judiciales y administrativas.	<p>Este derecho puede ser demostrado, de acuerdo a sus usos y costumbres, ó a través de cualquier medio de prueba legalmente aceptado, entre estos:</p> <p>≠ Títulos Coloniales</p> <p>≠ Identificación de parcialidades indígenas</p> <p>Listados de comunidades étnicas por fuera de los resguardos o tierras colectivas de comunidades negras.</p>

	Definición	Calidad del sujeto	Prueba de calidad
	totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera (Convenio 169 OIT, Leyes: Ley 70/93).		
Ocupación colectiva de comunidades negras	La ocupación colectiva de comunidades negras, es el asentamiento ancestral de las comunidades negras sobre las tierras baldías que son susceptibles de ser tituladas colectivamente, en la cuenca del Pacífico o en zonas similares del País, en las cuales desarrollan actividades económicas, sociales y culturales; sin que necesariamente hayan sido demarcadas (Convenio 169 de la OIT, Ley 70 de 1993). Art. 2 num. 6, Ley 70/93 Es el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras en tierras para su uso colectivo, que constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de producción.	Es la comunidad negra que, en tanto sujeto colectivo y titular del derecho fundamental al territorio, posee una cultura propia, comparte una historia, tiene sus propias tradiciones y costumbres, y ocupa ancestralmente un territorio susceptible de ser titulado colectivamente, de acuerdo a la ley 70 de 1993. Características estas, que le permite a la comunidad su exigibilidad a través de la tutela y otras acciones judiciales y administrativas.	Este derecho puede ser demostrado, de acuerdo a sus usos y costumbres, ó a través de cualquier medio de prueba legalmente aceptado, entre estos: ≠ Títulos Coloniales ≠ Registros históricos de propiedad por manumisión. ≠ Identificación de parcialidades indígenas Listados de comunidades étnicas por fuera de tierras colectivas de comunidades negras.
Poseción de grupos étnicos en Predios privados	Existen comunidades indígenas y afro colombianas que poseen colectivamente predios privados, donde la comunidad se reconoce como dueña, desarrolla sobre el territorio sus actividades productivas, económicas, sociales, cosmogónicas y culturales como sujeto colectivo de manera pacífica, pública y sin interrupciones, pero no aparece en el folio de matrícula del respectivo inmueble como titular de ese derecho. Este es el caso de grupos étnicos despojados de sus posesiones ancestrales porque no contaban con la seguridad jurídica de la titulación y al desplazarse ejercen posesiones colectivas	La posesión es ejercida colectivamente por la comunidad, sus miembros no se consideran individualmente como poseedores, la comunidad es la titular de la posesión como sujeto colectivo de derechos. En este sentido la Corte Constitucional ha señalado que: “La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos” (Sentencia T-380 de 1993 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).	La posesión colectiva de la comunidad se probará con testimonios de sus integrantes que den cuenta de las actividades económicas, productivas, sociales, cosmogónicas y culturales ejercidas sobre el territorio, de acuerdo a sus usos y costumbres ó través de cualquier medio de prueba legalmente aceptado.

	Definición	Calidad del sujeto	Prueba de calidad
Áreas especiales de uso	<p>Las áreas especiales de uso en los territorios colectivos son aquellas delimitadas de acuerdo con el uso y aprovechamiento tradicional de bosque natural, sistemas de producción tradicionales de minería, caza y pesca y las áreas de uso y aprovechamiento individual, con arreglo al “artículo 6 y del artículo 11 del Decreto 1745”.</p> <p>En los resguardos indígenas las áreas de uso especial se definen según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 99 de 1993 donde se establece su responsabilidad en la formulación del Plan de ordenamiento territorial.</p> <p>Otras áreas especiales de uso en los territorios colectivos son las señaladas por el Ministerio de Minas y Energía según lo establecido para las zonas mineras de las minorías étnicas Capítulo XIV Ley 685 de 2001.</p> <p>“El Ministerio de Minas y Energía señalará y delimitará las zonas mineras dentro de los territorios de las comunidades indígenas y negras en las cuales la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables deberá hacerse bajo condiciones especiales sobre la protección y participación de estas comunidades, con el fin de preservar sus características culturales y económicas. Los grupos indígenas y las comunidades negras para la solicitud de la licencia de exploración y explotación sobre los yacimientos y reservas de carbón que se encuentran dentro de su territorio, se registrarán por el Artículo 125 del Código de Minas y Artículo 27 de la Ley 70 de 1993.</p> <p>Por su parte el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial establece Zonas de Uso Especial que pueden ser aplicadas a los territorios colectivos y a los resguardos indígenas. “... son unidad de manejo sostenible aplicable a aquellas áreas en donde se requiere implementar medidas de</p>	<p>Entre las funciones de las Juntas de los Consejos Comunitarios de los territorios colectivos de comunidad negra, vale destacar: i) que les compete velar por la conservación del territorio colectivo, ii) ejercer el gobierno económico de las tierras, según sus sistemas de derecho propio y la legislación vigente; y iii) delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y aprovechamiento individual, familiar y comunitario, en el territorio titulado colectivamente, reconociendo las que han venido ocupando tradicionalmente y con base en el reglamento que expida la Asamblea General, entre otras facultades y funciones.</p> <p>Por su parte las autoridades de los resguardos y cabildos indígenas asumen las mismas responsabilidades y derechos ambientales reconocidos a los municipios como entes territoriales. (Ley 99 de 1993 art 67.)</p>	<p>Planes de uso y manejo y planes de ordenamiento territorial colectivos aprobados por la autoridad étnica y por la autoridad ambiental en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y en especial por su artículo 66.</p>

	Definición	Calidad del sujeto	Prueba de calidad
	manejo específicas, para regular el acceso o el tipo de actividades a permitir en sectores con una alta intensidad de uso, para proteger los recursos naturales; establecer umbrales para la recuperación de especies sobre-explotadas o para garantizar la seguridad pública frente a contingencias. En estas zonas se restringirá el grado de intervención humana a actividades como: investigación, monitoreo, educación ambiental, ecoturismo, recreación de bajo impacto, anclaje, canal de acceso, pesca sostenible, entre otros.		

Tabla 2: Guía para la identificación de los derechos territoriales étnicos vulnerados

Territorios étnicos titulados		
	Variables a identificar	Información
1	Presencia de terceros sin derechos en el territorio	Listas de chequeo de la información institucional recolectada (territorios étnicos titulados) Revisión de casos de saneamiento Conflictos identificados en el Estudio Socioeconómico/ Informe Técnico Otros derechos en el territorio
2	Presencia de otros titulares de derechos en el territorio	
3	Explotación ilegal de recursos por parte de terceros	
4	Presencia de mega proyectos económicos de monocultivos, explotación minera, turística o portuaria	
5	Siembra de cultivos ilícitos por parte de terceros	
6	Venta ilegal de tierras comunales	
7	Ocupación y/o apropiación de tierras comunales por parte de terceros	
8	Desconocimiento y/o irrespeto por parte de habitantes o terceros de: Autoridades étnicas, reglamentos, planes de uso y manejo, plan de vida, plan de etnodesarrollo	
9	Necesidades territoriales sin resolver	
10	Conflictos de límites entre tierras de comunidades negras y resguardos	Listas de chequeo de la información institucional recolectada (territorios étnicos titulados) Procedimientos de delimitación y deslinde pendientes Conflictos identificados en el Estudio Socioeconómico/ Informe Técnico
11	Conflictos de límites entre tierras de comunidades negras	
12	Conflictos de límites entre resguardos	
13	Conflictos de límites entre territorios étnicos y baldíos	
14	Conflictos de límites entre territorios étnicos y de particulares	
15	Delimitación de espacios comunales respecto a los de uso individual y familiar	Listas de chequeo de la información institucional recolectada (territorios étnicos titulados) Áreas de Reserva Forestal, Parques Nacionales Conflictos identificados en el Estudio Socioeconómico/ Informe
16	Negociación de predios individuales adquiridos con anterioridad a la titulación	
17	Superposición del territorio con áreas de interés público	
18	Violación del derecho a la consulta previa libre e informada	

		Técnico Otros derechos en el territorio
Territorios étnicos ancestrales y/o en proceso de titulación		
	Conflicto	Información solicitada
1	Presencia de terceros sin derechos en el territorio	Listas de chequeo de la información institucional recolectada (territorios étnicos en trámite de titulación) Estado del proceso Conflictos identificados en el Estudio Socioeconómico/ Informe Técnico Otros derechos en el territorio
2	Presencia de otros titulares de derechos en el territorio	
3	Explotación ilegal de recursos por parte de terceros	
4	Siembra de cultivos ilícitos por parte de terceros	
5	Ocupación y/o apropiación de tierras comunales por parte de terceros	
6	Necesidades territoriales de la comunidad étnica sin resolver	
7	Desconocimiento por parte de habitantes o terceros de: autoridades étnicas, reglamentos, planes de uso y manejo, plan de vida, plan de etnodesarrollo	
8	Presencia de mega proyectos económicos de monocultivos, explotación minera, turística o portuaria	
9	Violación del derecho a la consulta previa libre e informada.	
Territorios étnicos titulados, territorios ancestrales y/o en proceso de titulación		
	Violaciones a los DD.HH y del DIH ²⁴ con relación directa a tierras y territorios	Información solicitada
1	Ocupación y destrucción de bienes	
2	Ocupación de territorios étnicos titulados y no titulados	
3	Desplazamiento forzado	
4	Bloqueos de alimentos y combustible	
5	Confinamiento (Aislamiento – toques de queda- vedas)	
6	Repoblamiento en territorios abandonados por el desplazamiento	
7	Ocupación y/o destrucción de sitios sagrados	
8	Destrucción de infraestructura	
9	Instalaciones de minas anti personas	
10	Delitos contra derechos territoriales colectivos	
11	Fumigaciones de cultivos de uso ilícito	
12	Utilización de centros de salud por parte de actores armados	
13	Utilización de escuelas por parte de actores armados	
14	Utilización de sitios de culto por parte de actores armados	

ETAPA 2: Estudio de la Solicitud e Inscripción en Folio.

2.1 Descripción y Alcance del estudio de la solicitud

El objetivo de este paso es complementar y analizar la información que permita confirmar si la solicitud de protección es sobre derechos territoriales colectivos étnicos o, si por el contrario, debe ser redireccionada en el RUPTA como una solicitud de protección de derechos individuales. Hecha esta determinación, el INCODER deberá comunicar sobre la medida y solicitar a la(s) Oficina(s) de Registro de Instrumentos Públicos respectiva(s) la

²⁴ Procuraduría General de la Nación – PGN – 2008 “Primero las víctimas, criterios para la reparación integral de los grupos étnicos, Fase 2” pág. 60 y Pág. 133

anotación de la misma en el folio de matrícula en el caso de territorios titulados. En el caso de territorios no titulados de comunidades asentadas en baldíos, se le solicitará a la(s) ORIP la apertura de folio a nombre de la Nación y la anotación de la medida en el mismo.

Como resultado de este paso se complementará la información contenida en la solicitud de protección tanto sobre el estado de reconocimiento y legalización, como sobre las situaciones de desplazamiento, confinamiento, usurpación, presencia de mega proyectos, a través de un trabajo mancomunado entre la institucionalidad (INCODER y MIJ-DET) y las autoridades étnicas afectadas. Es importante señalar que en este paso es imprescindible comunicar a las autoridades étnicas sobre la existencia de la solicitud para garantizar su participación en el procedimiento de protección.

Una vez realizadas estas acciones, se procede a la identificación de las instituciones estatales que tendrían competencia en la protección de los derechos territoriales étnicos vulnerados o en riesgo de vulneración.

Concretamente, el INCODER debe complementar su información sobre la situación de reconocimiento legal o trámite del territorio étnico solicitando la información cartográfica respectiva al Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- para la determinación del territorio a proteger, y apoyándose en otras entidades como la UAESPNN y las CAR. De manera paralela, solicita información a la Dirección Étnica correspondiente del Ministerio del Interior y de Justicia sobre la vigencia de las autoridades del territorio étnico identificado y de la pertenencia a estos territorios de los peticionarios.

Tras analizar toda la información, el INCODER certifica la aceptación de la solicitud de protección para su actualización en el RUPTA y evalúa las necesidades de titulación y seguridad jurídica (territorios titulados y no titulados. Ver Tabla No. 1) que se requiera atender de forma preferente, como efecto de la medida de protección de acuerdo con las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en desarrollo de la Sentencia T – 025 de 2004. Por lo demás, comunicará por escrito sobre la medida a las Direcciones Étnicas del MIJ y a las Procuradurías Delegadas para la Prevención en Materia de DDHH y Asuntos Étnicos y/o para Asuntos Ambientales y Agrarios y solicita a la(s) Oficina(s) de Registro de Instrumentos Públicos respectiva(s) - ORIP la anotación de la misma en el folio de matrícula, en el caso de territorios titulados, o requiere la apertura de folio a nombre de la Nación, en el caso de territorios no titulados de comunidades asentadas en baldíos.

Del análisis de la información también puede concluirse que no se trata de una solicitud sobre derechos territoriales colectivos étnicos y, por lo tanto, ésta debe ser redireccionada en el RUPTA como una solicitud de protección de derechos individuales. El INCODER, mediante acto administrativo, remite la solicitud a la ORIP correspondiente y comunica por escrito de lo actuado al solicitante, si le es posible, o a la Direcciones Étnicas del MIJ para que a través de ellas se realice este procedimiento y se le permita a éste interponer los recursos que considere pertinentes.

Si a partir del análisis de la información, el INCODER determina que la solicitud fue realizada por un tercero (no perteneciente a la comunidad o grupo étnico), sin derecho en el territorio étnico colectivo, se debe **rechazar** la solicitud y comunica por escrito al solicitante, a la autoridad étnica, al Ministerio del Interior y de Justicia –Direcciones Étnicas- y a la Procuraduría General de la Nación.

Ante las situaciones descritas, el solicitante puede interponer los recursos de reposición o, en subsidio, el de apelación. El caso será analizado de manera conjunta por el INCODER y el Ministerio del Interior y de Justicia –Direcciones Étnicas, según sea el caso-, y se tomará una decisión sobre los recursos interpuestos.

Por último, el INCODER informará sobre todas sus actuaciones a la Procuraduría General de la Nación, Delegada Preventiva en Materia de DDHH y Asuntos Étnicos.

Por su parte, las Direcciones Étnicas del Ministerio del Interior y de Justicia, además de las acciones referidas, deben revisar su propio sistema de información, contactar a las autoridades étnicas para notificarlas de la existencia de la solicitud e indagar si los peticionarios se encuentran censados dentro de los territorios o resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras a los que se hace mención. Es importante señalar que las DET del MIJ deben solicitar a las autoridades étnicas la información referente a los Planes de Vida, reglamentos internos, planes de uso y manejo y planes de etnodesarrollo.

Además, las DET del Ministerio del Interior y de Justicia tienen la responsabilidad de informar a la Procuraduría General de la Nación sobre las caracterizaciones de los territorios étnicos de acuerdo con las variables exigidas por la Honorable Corte Constitucional. En aras de facilitar la respuesta institucional en la aplicación de estos mecanismos, las Direcciones Étnicas deberán radicar las solicitudes de protección en su propio Sistema de Información sobre territorios de grupos étnicos e incluir lo pertinente en términos de su afectación por las causas identificadas en el proceso permanente de caracterización del territorio.

Ahora bien, la Procuraduría General de la Nación en cabeza de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos²⁵ y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, según el caso (Decreto 262 de 2000; artículo 26 numerales 9,10,11) puede solicitar, si así lo considera necesario, al INCODER, al Ministerio del Interior y de Justicia, -Direcciones de Asuntos para Comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras y de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM-, al Programa Presidencia de DDHH y DIH, los Ministerios de Agricultura, Minas y Energía,

²⁵ Conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del Artículo 7° del Decreto Ley 262 de 2000, el Procurador General Expide la resolución No 017 de 2000 que en su artículo 18 establece que la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos debe "Intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea necesario defender el orden jurídico, el patrimonio público o las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas".

Cultura y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otros ministerios y a la Defensoría del Pueblo información relevante a cerca de situaciones de vulneración o riesgo de vulneración de derechos territoriales y de las actuaciones de estas entidades para atender dicha problemática.

Si bien dicha información es de gran importancia para la PGN, pues a partir de ella puede requerir a la entidades con competencia acciones efectivas, oportunas, integrales y diferenciales para la protección de los derechos territoriales de los grupos étnicos, ésta se considera como un insumo relevante en la caracterización y análisis de la misma que deben llevar a cabo las Direcciones Étnicas del Ministerio del Interior y Justicia sobre los territorios étnicos en cuestión. Una vez las Direcciones Étnicas sistematizan, depuran y estudian toda la información institucional y comunitaria, complementan sus bases de datos y evalúan las afectaciones de los derechos territoriales que incluyen, entre otros:

- La identificación de los hechos de desplazamiento forzado;
- Invasión del territorio de comunidades indígenas o negras;
- Usurpación de funciones públicas, perturbación de actos oficiales o violencia contra autoridades étnicas;
- Implementación de mega proyectos productivos de monocultivos, explotación minera, turística o portuaria;
- Ausencia o anomalías en los procedimientos de Consulta Previa;
- Explotación ilegal de recursos naturales, renovables y no renovables;
- Usurpación de tierras (cambio arbitrario de linderos);
- Ventas ilegales de derechos sobre el territorio étnico;
- Limitaciones para implementar los planes de manejo y ordenamiento del territorio,
- Pérdida del patrimonio natural y cultural; etc.

En cuanto a la afectación del patrimonio cultural, las Direcciones Étnicas del MIJ, según sea el caso, deben solicitar al Ministerio de Cultura los informes correspondientes a patrimonio cultural e inmaterial y bienes materiales. Para la afectación ambiental, la DET respectiva del Ministerio del Interior y de Justicia solicita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los estudios de impacto ambiental.

En síntesis, este paso consiste en revisar y complementar la información consignada en la solicitud para la identificación precisa, jurídica, cultural y física de los derechos territoriales étnicos a proteger, así como para especificar los hechos o situaciones de vulneración ocurridas en los territorios. Todo ello, con el propósito de organizar la información necesaria para determinar las actuaciones institucional y comunitaria en los pasos siguientes, y hacer la actualización en el RUPTA.

2.2 Matriz de Procedimiento

ESTUDIO DE LA SOLICITUD	
<i>¿Quién es el responsable?</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INCODER ▪ Direcciones Étnicas del MIJ²⁶ ▪ IGAC ▪ ORIP
<i>¿Cómo se hace?</i>	<p>El Ministerio del Interior y de Justicia a través de sus Direcciones de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM, y de Comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras:</p> <p>Solicita al INCODER, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Programa Presidencia de DDHH y DIH, y a la Defensoría del Pueblo información a cerca de situaciones de vulneración o riesgo de afectación de derechos territoriales y de las actuaciones de estas entidades para atender dicha problemática.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contactan a las autoridades étnicas para: (i) determinar el territorio; (ii) notificarlas de la existencia de la solicitud e indaga si los peticionarios se encuentran censados dentro de los territorios o resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras a los que se hace mención; y (iii) solicitar los Planes de Vida, reglamentos internos, planes de uso y manejo y planes de etnodesarrollo. ✓ Envía la información solicitada al INCODER. ✓ Informa por escrito de todas sus actuaciones a la Procuraduría General de la Nación, Delegada Preventiva en Materia de DDHH y Asuntos Étnicos ✓ Complementa y evalúa la información sobre las afectaciones de los derechos territoriales que incluye, entre otros: <ul style="list-style-type: none"> - La identificación de los hechos de desplazamiento forzado; - La identificación de zonas de desarrollo de mega proyectos económicos de monocultivos, explotación minera, infraestructura turística o portuaria. - Invasión al territorio de comunidades indígenas o negras; - Usurpación de funciones públicas, perturbación de actos oficiales - Violencia contra autoridades étnicas; - Explotación ilegal de recursos naturales; - Usurpación de tierras (cambio arbitrario de linderos); - Ventas ilegales de derechos sobre el territorio étnico; - Limitaciones para implementar los planes de manejo y ordenamiento del territorio, - Pérdida del patrimonio natural y cultural ✓ Integra dicha información a la caracterización del territorio étnico en cuestión. <ul style="list-style-type: none"> ▪ El INCODER:

²⁶ Decreto 1720 del 21 de mayo de 2008, por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y de Justicia y se dictan otras disposiciones.

ESTUDIO DE LA SOLICITUD	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Solicita información cartográfica sobre el territorio en cuestión al IGAC para la especialización de la información. ✓ Verifica el estado de reconocimiento y formalización de los derechos sobre los territorios étnicos colectivos afectados. ✓ Determina las necesidades de titulación y de seguridad jurídica sobre los derechos territoriales de acuerdo con la situación particular. ✓ Solicita información a las DET del MIJ sobre: (i) vigencia autoridades del territorio étnico; y (ii) pertenencia al territorio de los peticionarios. ✓ Certifica la aceptación o redireccionamiento de la solicitud de protección para su actualización en el RUPTA. ✓ Comunica de esta medida y solicita a la(s) Oficina(s) de Registro de Instrumentos Públicos respectiva(s) la anotación de la misma en el folio de matrícula en el caso de territorios titulados. ✓ Para los territorios étnicos no titulados, el INCODER solicitará el concurso de otras entidades (UAESPNN, CAR) con el fin de demarcar (acto administrativo) el territorio a proteger. ✓ En el caso de territorios no titulados de comunidades asentadas en baldíos, se le solicita a la(s) ORIP la apertura de folio a nombre de la Nación y la anotación de la medida de protección. ✓ Evalúa las necesidades de titulación y seguridad jurídica (territorios titulados y no titulados) que se requiera atender de forma prioritaria/ ✓ Informa de todas sus actuaciones a la Procuraduría General de la Nación, Delegada Preventiva en Materia de DDHH y Asuntos Étnicos. ▪ La ORIP respectiva (plazo por definir): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Recibida la comunicación sobre la medida y la solicitud de anotación por parte del INCODER, inscribe la medida de protección en el folio de los territorios titulados. ✓ En el caso de territorios no titulados de comunidades asentadas en baldíos hace la apertura del folio a nombre de la Nación e inscribe la medida en el mismo. ▪ El IGAC suministra al INCODER las bases cartográficas necesarias para la determinación del territorio étnico a proteger (titulado o no titulado).
¿De qué herramientas se dispone?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planes de manejo ambiental por la UAESPNN. ▪ Planes de uso y manejo, Planes de Vida, Planes de Ordenamiento Ambiental y Planes de Etnodesarrollo desarrollado por las autoridades étnicas o los elaborados por organizaciones no gubernamentales solicitados por las comunidades étnicas. ▪ Certificación del cumplimiento de la función ecológica del territorio colectivo o resguardos indígenas emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. ▪ Inventarios del patrimonio material e inmaterial de los pueblos indígenas y comunidades negras en sus territorios y/o hábitat de uso ancestral o tradicional. ▪ Información institucional sobre concesiones y licencias de explotación de recursos naturales renovables y no renovables del Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

ESTUDIO DE LA SOLICITUD	
	<p>Ministerio de Transporte y las Corporaciones Autónomas Regionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Modelo de acto administrativo de aceptación o redireccionamiento de la solicitud del INCODER. Modelo de comunicación para envío del acto administrativo de la aceptación o redireccionamiento de la solicitud por parte del INCODER a las entidades y a las autoridades étnicas. Modelo de solicitud de información del INCODER a las entidades con competencia. Modelo de solicitud cartográfica del INCODER al IGAC. Modelo de acto administrativo de certificación de la solicitud Modelo de acto administrativo de redireccionamiento de la solicitud Modelo de comunicación de la medida y solicitud de anotación en el folio a la ORIP por parte del INCODER. Modelo de acto administrativo para demarcación del territorio no titulado sobre baldíos. Modelo de envío de información de todas las actuaciones del INCODER a la PGN. Modelo de comunicación del MIJ a las autoridades étnicas notificando existencia de la solicitud y solicitando información complementaria. Modelo de envío de información del MIJ al INCODER. Modelo de envío de información de todas las actuaciones del MIJ a la PGN. Modelo de oficio remitido de la ORIP al INCODER-RUPTA donde conste la inscripción de la medida en el folio. Modelo de oficio remitido de la ORIP al INCODER donde conste la apertura del folio a nombre de la Nación de la medida. Modelo de comunicación sobre la inscripción de la medida en el folio de matrícula a las autoridades étnicas por parte del INCODER. Modelo de comunicación de la apertura del folio a nombre de la Nación por parte del INCODER a las autoridades étnicas.
<p>¿En qué consiste el estudio de la solicitud?</p>	<p>Por parte del INCODER</p> <ul style="list-style-type: none"> En revisar, complementar y analizar la información institucional y comunitaria que permita confirmar si la solicitud de protección es sobre derechos territoriales colectivos, o si por el contrario debe ser redireccionada en el RUPTA como una solicitud de protección de derechos individuales. En la ubicación geográfica y precisa del territorio mediante ejercicio cartográfico con base en información del IGAC. El INCODER y las DET del MIJ revisarán los siguientes aspectos si se trata de territorios étnicos titulados o ancestrales en trámite de titulación: (i) resguardos indígenas, (ii) tierras colectivas de comunidades negras, (iii) tierras comunales, entre éstas reservas indígenas, (iv) territorios tradicionales o ancestrales y (v) trámites pendientes de titulación, ampliación, saneamiento, reestructuración y aclaración de títulos a favor de comunidades indígenas y negras, (vi) posesiones de grupos étnicos en predios privados, (vii) tierras privadas de propiedad de la comunidad con destino a la titulación colectiva, (viii) necesidades de deslinde y aclaración de títulos. En la evaluación de las necesidades de titulación y seguridad jurídica de los territorios en cuestión, para lo cual se solicita información complementaria a otras fuentes institucionales y étnicas (autoridades, organizaciones)

ESTUDIO DE LA SOLICITUD	
	<p>Por parte de las Direcciones Étnicas del MIJ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En la complementación de la información institucional y comunitaria relativa a la caracterización de la problemática territorial. ▪ En la identificación de actividades productivas y tipo de organización productiva (tradicional, empresarial propia o externa) y tiempo de permanencia cuando se trata de actividades ejercidas por actores externos. ▪ En la elaboración de inventarios de existencia y estado de conservación del patrimonio natural y cultural de las comunidades afectadas o en riesgo de afectación. ▪ En la identificación de mega proyectos o proyecciones de obras de infraestructura, actividades agroindustriales, inversiones, u otras actividades de envergadura a realizar dentro de los territorios o en sus áreas de influencia. • En el estudio de informes sobre conflictos de uso y manejo emitidos por la autoridad ambiental o por terceros reconocidos por autoridades ambientales y tradicionales.
¿Cómo participan las autoridades étnicas?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Serán informadas de la(s) solicitud(es) de protección correspondiente y del objetivo del carácter y alcance de la medida de protección y la importancia de su participación. ▪ Aporta información para clarificar si la solicitud corresponde total o parcialmente a su territorio étnico y la pertenencia del peticionario a dicho territorio (información censal). ▪ Serán notificadas sobre la aceptación o redireccionamiento de la solicitud de protección mediante certificación motivada por parte de la DET respectiva del MIJ. ▪ Aportarán información sobre otros procesos adelantados con la institucionalidad competente y que consideren pertinentes para aportar a la solicitud de protección de su territorio.
¿Qué otras fuentes se pueden consultar para el estudio de la solicitud?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de ser necesario se requerirá información complementaria a las Corporaciones Autónomas Regionales, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales y/o a las dependencias municipales y regionales con competencia en asuntos étnicos.
¿Cuándo se reconfirma el trámite de la solicitud por la Ruta Étnica?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuando se reconfirma el cumplimiento de los requisitos en la solicitud a través del análisis de la información allegada por las instituciones y las autoridades étnicas.
¿Cuándo se redirecciona el trámite de la solicitud de protección hacia la Ruta Individual?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizado el análisis de la información consignada en la solicitud y complementada con la allegada por las entidades y comunidades se puede concluir que no corresponde a derechos colectivos territoriales étnicos en cabeza de una comunidad indígena o negra. ▪ Cuando se verifica que la solicitud de protección corresponde a un derecho de tipo individual así la persona pertenezca o no a un grupo étnico. ▪ Cuando su derecho no está ubicado en un territorio étnico (incluyendo los no titulados, los ancestrales y tradicionales) ▪ Cuando se trate de una tierra privada a favor de una familia indígena por solicitud individual y no como integrante de un pueblo. ▪ Cuando el solicitante no es integrante de un grupo indígena o de comunidades negras. ▪ Cuando la solicitud es realizada por un tercero ocupante de mala fe o tercero sin derecho dentro del territorio étnico que pretenda tener beneficios territoriales a partir de la solicitud

Importante

- Los cabildos indígenas o asociaciones étnicas tradicionales y las juntas de los consejos comunitarios de comunidades negras en su calidad de autoridades étnicas deberán ser informadas y consultadas sobre las solicitudes de protección que correspondan a los territorios de su jurisdicción y de los alcances de la medida, para lo cual se oficiará a dichas autoridades, solicitando además la información necesaria para complementar la identificación del territorio y de los derechos vulnerados
- La Procuraduría General de la Nación velará, en razón de sus competencias, para que el procedimiento derivado de la solicitud de protección sea aplicado de manera preferente por el INCODER, el Ministerio del Interior y de Justicia y las entidades con competencia en el registro de la información.
- Es imprescindible que las DET del Ministerio del Interior y de Justicia optimicen su Sistema de Información sobre territorios étnicos dando cuenta de su caracterización de acuerdo con las variables ordenadas por la Honorable Corte Constitucional.
- El ingreso de la información al RUPTA y al Sistema de Información NAIPD son fundamentales en términos de prueba pública de la afectación de los derechos, tanto para la visibilización oficial de estas afectaciones como para el tratamiento de medidas de reparación a la población cuyos derechos fueron vulnerados.

ETAPA 3: Activación de mecanismos para la protección de derechos territoriales y el patrimonio natural y cultural de las comunidades étnicas

3.1 Descripción y Alcance de la activación de mecanismos de protección

Esta *Etapa* busca promover la aplicación de los mecanismos e instrumentos que contribuyan a la realización efectiva del derecho al territorio como medio de realización de otros derechos. A partir de la evaluación sobre las necesidades territoriales y la caracterización sobre afectaciones al territorio, se requerirán las actuaciones institucionales y comunitarias orientadas a la protección del patrimonio natural y cultural²⁷ para la conservación de la calidad ambiental del territorio mediante los procedimientos establecidos para el uso y manejo sostenible, de manera que éste pueda cumplir con su función social, cultural y ambiental.

En este paso, las Direcciones Étnicas del MIJ, según sea el caso, deben realizar los requerimientos necesarios de acuerdo a las competencias institucionales para que de manera preferente adelanten los procedimientos y mecanismos, que según su función, le corresponde a cada entidad de acuerdo con las necesidades de reconocimiento,

²⁷ Ley 99 de 1993 y Decretos Reglamentarios. Leyes 45 de 1993 y 1185 de 2008.

formalización de derechos territoriales; protección y reparación por las afectaciones identificadas al patrimonio.

La Ruta Étnica se constituye en imperativo para la aplicación preferente de los procedimientos administrativos de constitución, saneamiento, ampliación, deslinde o clarificación de linderos de tierras colectivas de las comunidades étnicas garantizando la culminación efectiva de los procedimientos de reconocimiento y acceso del derecho al territorio.

En los procesos administrativos de acceso y seguridad jurídica, el INCODER comunicará por escrito a la ORIP – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos- correspondiente sobre el inicio y culminación de los trámites adelantados para su registro en el RUPTA. Dicha acción no sólo será usada como medio de verificación y seguimiento sobre el tratamiento preferente de los procedimientos pendientes, sino también como un mecanismo publicitario, dirigido a la sociedad en general, que permita conocer ampliamente las necesidades de seguridad jurídica que requieren y logran obtener los territorios cubiertos con la aplicación de esta Ruta de Protección.

El Ministerio del Interior y de Justicia, en cabeza de sus Direcciones de Asuntos Indígenas o Comunidades Negras, según solicitud, debe requerir la actuación de las autoridades ambientales conforme a sus competencias y funciones en la implementación y aplicación de los instrumentos de control, protección, restauración y conservación de los recursos naturales; así como en el ejercicio de la vigilancia y control sobre los usos sostenibles de los recursos, como la protección de la integridad cultural, social y económica asociada a los mismos²⁸; para lo cual tendrá en cuenta el derecho a la participación de las comunidades étnicas y sus autoridades²⁹. Dicha actuación debe ser comunicada a la PGN, Procuradurías Delegadas correspondientes.

De igual manera, ya sea la Dirección de Asuntos Indígenas o la Dirección de Comunidades Negras del MIJ, dependiendo de la solicitud, requerirá actuaciones al Ministerio de Cultura para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial constitutivos de los territorios de las comunidades étnicas³⁰, de acuerdo a sus competencias.

El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de sus Direcciones Étnicas, requerirá el cumplimiento de la normativa de protección de los derechos patrimoniales y territoriales de las comunidades étnicas a los Ministerios cuya actuación pueda generar algún tipo de afectación a dichos derechos. Entre ellos se contemplan la construcción de vías e infraestructuras para obras de desarrollo portuario, turístico y minero, o implementación de

²⁸ Ley 99, artículo 76 “La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la identidad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales, de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán previa consulta a los representantes de tales comunidades”.

²⁹ Ley 99, artículo 10 “La acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado”.

³⁰ Ley 1185 de 2008, artículo 5 por medio del cual se define el Procedimiento para la declaratoria de bienes de interés cultural y el artículo 8, parágrafos 1 al 4.

mega proyectos de monocultivos, y. cuyo desarrollo está bajo la responsabilidad de los Ministerios de Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural y el de Industria, Comercio y Turismo.

En este marco, tanto el Ministerio del Interior y de Justicia como la Procuraduría General de la Nación –PGN- velarán por el cumplimiento del derecho fundamental a la consulta previa libre e informada, y a la formulación e implementación de los planes de uso y manejo, planes de vida y etnodesarrollo e instrumentos de protección por autorregulación de las comunidades étnicas que se requieran.

Por último, la Procuraduría General de la Nación, las Direcciones Étnicas del MIJ, Acción Social y las autoridades y organizaciones étnicas deben realizar un seguimiento al procedimiento de protección de los derechos territoriales étnicos en cuestión.

3.2 Matriz de Procedimiento

ACTIVACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TERRITORIOS ÉTNICOS	
<i>¿Quién es el responsable?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • El Ministerio del Interior y de Justicia a través de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras y la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM. • Procuraduría General de la Nación (Delegada para asuntos Ambientales y Agrarios y; Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos). • INCODER (constitución, reestructuración, ampliación, saneamiento) • La ORIP del círculo correspondiente • La Superintendencia de Notariado y Registro – SNR-
<i>¿Cómo se hace?</i>	El INCODER emite un acto administrativo de inicio y de culminación del trámite de atención prioritaria/preferente para procedimientos de constitución, deslinde, aclaración y saneamiento del territorio colectivo, comunica a la ORIP para su anotación en el folio y actualiza el estado del territorio en el RUPTA.
<i>¿De qué herramientas se dispone?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de acto administrativo del INCODER para el inicio del procedimiento preferente de seguridad jurídica y se define el tipo de trámite • Modelo de Oficio de remisión INCODER del acto administrativo dirigido a la ORIP para inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria del inicio de los procedimientos de seguridad jurídica. • Modelo de Oficio de comunicación de la ORIP a la Superintendencia de Notariado y Registro –SNR- del inicio de los procedimientos, para que esta a su vez actualice el estado de los trámites de formalización en el RUPTA. • Modelo de acto administrativo de culminación del tratamiento preferente de los procedimientos pendientes de seguridad jurídica por parte del el INCODER. • Modelo Oficio de remisión del acto administrativo del el INCODER a la ORIP para inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de la culminación de los procedimientos de seguridad jurídica pendientes.

ACTIVACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TERRITORIOS ÉTNICOS	
	<ul style="list-style-type: none"> Modelo de Oficio de comunicación de la ORIP al INCODER comunicando el registro en el folio de matrícula para la actualización del estado en el RUPTA. Reglamentos internos, planes de uso y manejo, planes de etnodesarrollo, planes de vida de los grupos étnicos.
¿En qué consiste el trámite preferente de protección de derechos territoriales y patrimoniales?	<ul style="list-style-type: none"> Para los territorios legalmente constituidos: Consiste en el trámite prioritario que debe dar el INCODER a los procedimientos de ampliación, saneamiento, reestructuración y aclaración de títulos, en los resguardos y territorios colectivos de comunidades negras constituidos, a favor de comunidades indígenas y negras. Para los territorios no titulados: Consiste en el trámite preferente que debe dar el INCODER – o quien haga sus veces - para la constitución de resguardos indígenas o adjudicación de tierras a comunidades negras.
¿Qué resultados se obtienen?	<ul style="list-style-type: none"> Protección jurídica del territorio Seguridad jurídica de los resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras inscritos en el RUPTA Seguridad jurídica de los territorios tradicionales a través de la figura de resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras y su inscripción en el RUPTA. Prueba pública de la titularidad de estos derechos.
¿Quién debe hacer seguimiento a la acción institucional desarrollada?	<ul style="list-style-type: none"> El Ministerio Público, en cumplimiento de su mandato legal y constitucional de vigilancia, control y seguimiento, particularmente las Procuradurías Delegadas Ambiental y Agraria, y la Preventiva en Materia de DDHH y Asuntos Étnicos. Las Direcciones Étnicas del Ministerio del Interior y de Justicia. Acción Social en su calidad de coordinadora del SNAIPD. Autoridades y organizaciones étnicas

3.3. Procedimiento

3.3.1 Protección Jurídica para territorios étnicos titulados

Inicio del trámite de atención prioritaria para procesos de deslinde, aclaración y saneamiento mediante acto administrativo del INCODER

De acuerdo con sus funciones, el INCODER (Decretos 2164 de 1995 y 3759 de 2009) debe emitir un acto administrativo para iniciar la atención preferente a los procesos de formalización pendientes tales como deslinde, aclaración y saneamiento identificados en los territorios étnicos; en el cual deben quedar expresos los procedimientos que se pretenden culminar bajo este tratamiento preferente.

Es necesario desagregar el trámite cuando se trata de territorios étnicos en jurisdicción de varios municipios y círculos registrales.

Envío a la ORIP de la copia del acto administrativo del INCODER para anotar en el folio de matrícula correspondiente el inicio formal de los procedimientos preferentes con copia a la SNR

El INCODER comunica por escrito a la/ o las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos³¹ del acto administrativo de inicio de procedimientos de seguridad jurídica para que se hagan las anotaciones respectivas en los folios de matrícula inmobiliaria de los resguardos indígenas o de las tierras colectivas de comunidades negras (para la anotación la ORIP dispone de 30 días a partir de la fecha que fue recibida la copia del acto administrativo (Art. 3 Decreto 2007 de 2001). La anotación se realiza con el código respectivo para territorios étnicos.

La ORIP a su vez informa lo actuado al INCODER inmediatamente después de la recepción de la copia del acto administrativo, para que se actualice en el RUPTA el inicio de los procedimientos de seguridad jurídica que contempla la medida de protección.

Culminación por parte del INCODER de los trámites preferentes de seguridad jurídica de los territorios étnicos

El INCODER con el apoyo de las Direcciones de Asuntos para Comunidades Negras, Afro colombianas, Raizales y Palenqueras y de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio del Interior y otras entidades competentes, debe adelantar el estudio y trámite de los procedimientos pendientes de formalización de los derechos territoriales.

Envío a la ORIP y a la SNR de la comunicación sobre la culminación de los procedimientos de protección por parte del INCODER

Una vez culminados satisfactoriamente los procesos iniciados, el INCODER emite un Acto Administrativo que dé cuenta de lo actuado, enviando copia a la ORIP para que haga las anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. De igual manera debe enviar copia a la Dirección de Etnias del MIJ correspondiente para ser incluido en el sistema de información sobre pueblos indígenas y comunidades negras.

La ORIP responde informando sobre el resultado de la anotación para realizar la actualización del estado del territorio en el RUPTA.

3.3.2 Protección Jurídica para territorios colectivos no titulados

En terrenos baldíos: Demarcación cautelar del territorio y envío a la ORIP para que abra folio a favor de la nación y haga anotación de Protección e inicio de procedimientos de titulación

Cuando el grupo étnico habite terrenos baldíos de la nación, el INCODER, mediante acto administrativo, demarcará en conjunto con las autoridades étnicas correspondientes, el territorio étnico no titulado para proceder a la constitución de resguardo indígena o de adjudicación como territorio colectivo de comunidades negras. Para esta labor podrá

³¹ Se debe tener en cuenta que un territorio étnico puede estar ubicado en jurisdicción de varios municipios o departamentos. Por tanto, puede tener folio de matrícula inmobiliaria en más de un círculo registral.

solicitar apoyo a entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, cuando existan áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas traslapadas o limítrofes con el Resguardo o la tierra colectiva que se pretende constituir.

En Predios Privados: Identificación de derechos de posesión colectiva de grupos étnicos y envío a la ORIP para anotación e iniciación de trámites de compra directa para dotación de tierras a la comunidad

Los indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento que habiten terrenos de propiedad de particulares deben ser inscritos en la ORIP como poseedores colectivos en estos predios. De conformidad con lo establecido en la Ley 160 de 1994, artículo 85, el INCODER puede adquirir por negociación directa predios, mejoras rurales y servidumbres de propiedad privada, o que formen parte del patrimonio de entidades de derecho público para que sean tituladas a favor de las comunidades negras e indígenas que no las posean, o cuando la superficie que habitan sea insuficiente. La compra directa de tierras a particulares puede destinarse a la constitución, saneamiento y ampliación de resguardos indígenas y la titulación de territorios colectivos de comunidades negras. (Ley 160 de 1994, artículo 85, capítulo XIV parágrafo 1)

Desarrollo de trámites de constitución o titulación por parte del INCODER en predios Baldíos adquiridos por compra directa

El INCODER adelantará de manera preferente los procedimientos solicitados correspondientes a la constitución de los resguardos indígenas o a la adjudicación de tierras de propiedad colectiva a comunidades negras, de acuerdo a lo planteado anteriormente. Sea un baldío o un predio adquirido por compra directa se debe contar con el acompañamiento de las autoridades étnicas correspondientes y se solicitará a las instituciones competentes la información relacionada.

Envío a la ORIP para comunicarle sobre la culminación de procedimientos de titulación y registro en el RUPTA por parte del SNR

Una vez culminado el proceso de constitución de resguardos indígenas o adjudicación de tierras a comunidades negras, El INCODER elaborará una comunicación con los resultados jurídicos del procedimiento adelantado y enviará mediante oficio remisorio la información a la ORIP y a la Dirección de Etnias del MIJ correspondiente.

La ORIP enviará comunicación de lo actuado a la SNR para su registro y actualización en el RUPTA.

Importante

- La responsabilidad del INCODER, -por mandato legal de adelantar los procesos de seguridad jurídica de los territorios étnicos titulados, como saneamiento, ampliación, reestructuración, deslinde y aclaración de linderos, implica para su logro efectivo-, debe contar con las condiciones técnicas, operativas y financieras que permitan el logro de esta

responsabilidad. En este sentido, es necesario que el INCODER -o quien haga sus veces- con apoyo del Ministerio del Interior y de Justicia, adelante de manera previa los convenios de cooperación intersectorial y el desarrollo los proyectos y programas necesarios y suficientes que permitan el cumplimiento de este objetivo de manera eficiente.

- La Corte Constitucional establece (Sentencia T – 254 de 1994) que el territorio no es solamente el reconocido legalmente bajo la figura del resguardo sino también el territorio ancestral y/o tradicionalmente ocupado por tanto la Corte considero procedente el ejercicio de las facultades jurisdiccionales dentro del territorio en el que estaba asentada la comunidad.³² Hace parte de la protección jurídica de los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades negras los instrumentos reconocidos e implementados por sus autoridades para el ejercicio del gobierno propio.

- Considerando que las Direcciones Étnicas del Ministerio del Interior y de Justicia son responsables de la caracterización de los pueblos indígenas y las comunidades negras, afro colombianas, palenqueras y raizales, se recomienda que dentro de esta información se incluya el estado de los instrumentos de gobierno de dichos pueblos y comunidades. Ello en razón del reconocimiento legal a la Jurisdicción Indígena como a sus autoridades públicas (Artículo 246 de la Constitución Política), y a los Consejos Comunitarios de las tierras de propiedad colectiva de las comunidades negras (Decreto 1745 de 1995/ ley 70 de 1993).

- En el contexto nacional existen muchas comunidades que han perdido sus posesiones ancestrales por diferentes factores, entre estos, el desplazamiento forzado, la realización de proyectos económicos y de explotación de recursos naturales (renovables y no renovables) al interior de sus territorios, etc. Estas comunidades indígenas y negras víctimas del despojo, se ven obligadas a ejercer posesiones en predios privados vecinos a sus territorios o en lugares geográficamente apartados. A pesar de esto, en su mayoría conservan prácticas culturales, cosmogónicas y sociales que los diferencian de otras comunidades, y que se refleja en las formas de uso y manejo del territorio. Es de suma importancia que las instituciones evidencien esta particular forma de tenencia y de necesidades territoriales, y se adelante por parte del INCODER procedimientos de compra directa para titulación y protección de estas comunidades especialmente vulnerables e históricamente invisibilidades.

3.3.3 Protección del Patrimonio Natural de los territorios étnicos

Matriz de Procedimiento.

ACTIVACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE LOS TERRITORIOS ÉTNICOS	
<i>¿Quién es el responsable?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial • Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible • Además de las anteriores, las demás entidades que conforman el SINA como

³² Procuraduría General de La Nación; 2007 “La jurisdicción Especial Indígena en Colombia” Esther Sánchez Botero e Isabel Cristina Jaramillo Sierra. Segunda Edición.

ACTIVACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE LOS TERRITORIOS ÉTNICOS	
	instituciones del Estado responsables de la política y la gestión ambiental, es decir, los Institutos de Investigación y las Unidades Ambientales Urbanas.
<i>¿Cómo se hace?</i>	<p>Activación de mecanismos e instrumentos para la protección del patrimonio natural de los territorios:</p> <p>Las Corporaciones Autónomas Regionales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actuarán de acuerdo con sus competencias y jurisdicción en los casos de afectaciones al derecho territorial por conflictos de uso, manejo, erosión, deterioro o afectación a ecosistemas estratégicos, especies y áreas especiales de valor ecológico.</p> <p>El Ministerio del Interior y de Justicia sobre la base de información de presencia de mega proyectos económicos, turísticos, portuarios, mineros, y de infraestructura que afecten el territorio, podrá requerir a las autoridades ambientales la aplicación de los mecanismos necesarios de protección al patrimonio natural cuando así lo considere necesario. Dicha actuación será comunicada a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la PGN quien debe realizar el seguimiento y control de la eficaz y oportuna implementación de los mencionados mecanismos de protección.</p>
<i>¿De qué herramientas se dispone?</i>	<p>Activación de mecanismos e instrumentos para la protección del patrimonio natural de los territorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios de impacto ambiental (Resoluciones 1274 a 1291 de 2006), emitidos por el MAVDT. • Sanciones y medidas preventivas previstas en los artículos 84 y 85 de la Ley 99 de 1993, los artículos 243 y 337 del Código Penal y el sistema de comparendos ambientales de la Ley 1259 de 2008 y la ley 1333 de 2000 sobre comparendo ambiental y proceso sancionatorio ambiental. • Criterios técnicos para la zonificación y ordenamiento de los ecosistemas de valor estratégico (Decreto 216 de 2003, artículo 12). • Criterios para licenciamientos ambientales y sanciones e instrumentos de manejo y control ambiental (Decreto 3266, artículo 4 numeral 11 y decreto 1220 de 2005). • Procedimiento para la realización de la Consulta Previa libre e informada en proyectos que requieren licencias ambientales y para la viabilización de proyectos y medidas legislativas reguladas por el MIJ y MAVDT. • Planes de uso y manejo de los territorios étnicos. • Cartografía con información sobre ubicación, usos y conflictos sobre los recursos naturales de territorios étnicos. • Planes de Ordenamiento Territorial Municipal – POT y Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT. • Informes regionales de las Procuradurías Delegadas Judicial, Ambiental y Agraria.
<i>¿En qué consiste el trámite preferente de protección de derechos territoriales y patrimoniales?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Para protección del patrimonio natural <p>El MAVDT y/o las CAR determinarán las medidas de control y protección de manera preferente sobre los recursos naturales de los territorios étnicos según estado de riesgo o deterioro a los que están expuestos por presencia de mega proyectos o por usos indebidos por parte de terceros de los territorios abandonados por la violencia o en situación de confinamiento (Consulta Previa, Planes de Manejo Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Uso y Manejo de Territorios Colectivos).</p>
<i>¿Qué resultados se obtienen?</i>	<p>Protección de Patrimonio Natural</p> <p>Puesta en marcha de los mecanismos de protección establecidos por ley, de</p>

ACTIVACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE LOS TERRITORIOS ÉTNICOS	
	acuerdo con competencia y funciones de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
<i>¿Quién debe hacer seguimiento a la acción institucional desarrollada?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • El Ministerio Público, en cumplimiento de su mandato legal y constitucional de vigilancia, control y seguimiento, particularmente la Procuraduría Ambiental y Agraria. • El Ministerio del Interior y de Justicia, Direcciones de Asuntos Indígenas y Comunidades Negras. • Acción Social en su calidad de coordinadora del SNAIPD. • Autoridades y organizaciones étnicas

Evaluación preliminar de la solicitud para determinar conflictos y/o afectaciones ambientales.

La aceptación de la solicitud de protección, en la que se evidencien afectaciones al patrimonio natural en territorios parcialmente abandonados por desplazamiento masivo, implicará la atención preferente para proteger el patrimonio natural de los territorios étnicos frente a riesgos o evidencia de usurpación o uso indebido de los recursos naturales como la alteración de su estado de conservación en detrimento de la función social y ecológica del territorio.

De igual manera, la presencia de mega proyectos económicos, de monocultivos, y de explotación minera, turística o portuaria³³, en los términos definidos por la Corte Constitucional, son considerados como factor de riesgo para la integridad cultural y natural en los territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas. En estas circunstancias, la Corporación Autónoma Regional - CAR-, como autoridad ambiental regional, procederá a la implementación de procedimientos que permitan la verificación de la información y la implementación de acciones preliminares pertinentes cuando las afectaciones correspondan a situaciones de uso y manejo de recursos u afectaciones a los mismos en los territorios de su jurisdicción³⁴, en especial, si se tratan de afectaciones sobre la conservación de ecosistemas, especies y paisajes. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de sus respectivas direcciones, actuará según su competencia con base en la declaración de riesgos sobre el patrimonio natural, procurando las acciones necesarias para conservar la función social y ecológica del territorio³⁵.

En cada caso la autoridad ambiental valorará la información recibida y procederá a su profundización, de ser necesario, para requerir a terceros o poner en marcha las medidas de protección.

³³ Corte Constitucional, Auto 005 de 2009, sentencia T- 025 de 2004.

³⁴ Ley 99 de 1993; Artículo 31 funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales parágrafos 3, 4, 9, 11, 12, 14, 17, y en especial el parágrafo 21 relativo a la coordinación de acciones de conservación con las autoridades indígenas y de comunidades negras de las que trata la Ley 70 de 1993.

³⁵ Ley 99 de 1993; Artículo 5 Sobre funciones del Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial parágrafo 2, 11, 13, 14, 17, 23, 32, 34, 40: Artículo 7 del ordenamiento ambiental del territorio y 14.de las funciones del Consejo Nacional Ambiental.

Puesta en marcha de los mecanismos e instrumentos para protección del patrimonio natural: Consulta previa, estudio de impacto ambiental - EIA- Plan de Manejo y sanciones y medidas preventivas previstas en la Ley 99 de 1993, el decreto 262 de 2000, y de seguimiento y sanción del decreto 1220 de 2005 y las leyes 1259 de 2008 y la ley 1333 de 2000,

Una vez identificados los factores de riesgo como la presencia de mega proyectos o proyectos, obras o actividades que generen o pueden generar impactos negativos en el territorio o en las comunidades allí asentadas, la autoridad ambiental, CAR o MAVDT, verificará el cumplimiento de los requisitos de ley previstos para la protección del patrimonio natural y el derecho a la participación de los pueblos mediante la aplicación de la consulta previa, libre e informada; la formulación participativa de los estudios de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental.

En cumplimiento de su función, las Procuradurías Delegadas para los Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, y la Ambiental y Agraria podrán, adicionalmente, verificar la situación que ha dado lugar a la solicitud de protección para recomendar y actuar cuando fuere necesario frente a las afectaciones a los derechos territoriales relacionadas con las comunidades étnicas (Decreto 262 de 2000, artículos 26 numeral 9 para funciones de defensa y protección de DDHH³⁶ y artículo 31 numeral 1 para funciones de intervención judicial en procesos civiles y agrarios). Otras medidas de seguimiento, control y sanción sobre las recomendaciones y acuerdos para la protección ambiental y la conservación se darán de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre sanciones y comparendos ambientales pre istos en las Leyes 1259 de 2008 y 1333 del 2000.

Reconocimiento y valoración de instrumentos propios de protección ambiental como los planes de uso y manejo, y reglamentos internos.

Desde el derecho propio, las medidas reconocidas para la protección de los territorios y los derechos ejercidos por las comunidades étnicas sobre éstos están concentradas en la existencia de los reglamentos internos, los planes de vida de los pueblos indígenas y los planes de uso y manejo de los territorios colectivos, en los que las comunidades étnicas expresan su visión y definición en el manejo y uso del territorio. El reconocimiento de estos instrumentos y su respeto por parte actores externos a la comunidad y al territorio constituyen un paso importante en la protección de los recursos y sus prácticas tradicionales de uso.

La autoridad ambiental regional está en capacidad de acompañar y validar dichos instrumentos de acuerdo con sus competencias, según lo establecido en el artículo 58 la Carta Política de 1991, en el cual se establece “la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica”. En el caso de los

³⁶ Decreto 262 de 2000; artículo 9 “Intervenir en las actuaciones administrativas y de policía en las que tengan interés miembros de las minorías étnicas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, los derechos y garantías fundamentales o el patrimonio público.”

resguardos indígenas, la función social de la propiedad colectiva se encuentra expresamente definido en el Decreto 2164 de 1995.³⁷ Para las comunidades negras, la Ley 70 de 1993 establece que la propiedad colectiva de dichas comunidades debe ser ejercida de conformidad con la función social que le es inherente y en consecuencia los titulares deberán cumplir las obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables.

La protección del patrimonio natural consiste básicamente en:

- ≠ En el respeto y aplicación del derecho a la consulta previa libre e informada a los grupos étnicos en la toma de decisiones que les afecte en materia del uso, explotación o administración de los recursos naturales que hacen parte de sus territorios o en la implementación de medidas legislativas o administrativas que surtan algún impacto sobre los mismos.
- ≠ En la formulación participativa de los Planes de Manejo Ambiental como medida de prevención, mitigación, reparación de los impactos identificados en los Estudios de Impacto Ambiental – EIA- de obras, actividades productivas o proyectos a realizarse en los territorios de las comunidades negras y pueblos indígenas (Ley 99, título III, Artículo 57)
- ≠ En el fortalecimiento y apoyo a la implementación de los planes de uso y manejo de los territorios étnicos diseñados por iniciativa o con participación de las comunidades y sus autoridades tradicionales o legalmente reconocidas.
- ≠ En el seguimiento y control sobre las medidas de mitigación, reparación, restitución derivadas de los Estudios de impacto ambiental, y en las acciones de sanción y/o comparendos ambientales por incumplimiento o desconocimiento de las medidas requeridas por la autoridad ambiental en protección del ambiente, los recursos naturales y la función ecológica de la propiedad.

Importante:

Se considera Patrimonio Natural:

- ≠ Los monumentos naturales contruidos por formaciones físicas y biológicas o por los grupos de esas formaciones que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.
- ≠ Las formaciones geológicas o fisiológicas y las zonas estrictamente delimitadas constituyendo el hábitat de especies de animales y vegetales amenazados de desaparición que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación.

³⁷ Decreto 2164 de 1995 en el Artículo 19 establece que” Para los efectos del presente decreto, la función social de la propiedad de los resguardos está relacionada con la defensa de la identidad de los pueblos o comunidades que los habitan, como garantía de la diversidad étnica y cultural de la Nación y con la obligación de utilizarlas en beneficio de los intereses y fines sociales, conforme a los usos, costumbres y cultura, para satisfacer las necesidades y conveniencias colectivas, el mejoramiento armónico e integral de la comunidad y el ejercicio del derecho de propiedad en forma tal que no perjudique a la sociedad o a la comunidad” Retomado del texto de la Universidad del Rosario “ Función ecológica de la propiedad, en los resguardos indígenas de Colombia”

- ≠ Los sitios naturales y las zonas naturales estrictamente delimitados que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o la conservación.
- ≠ Todos los animales plantas territorio y conjuntos de estos tres grupos que signifiquen valores universales en cuanto a la protección y conservación de especies animales y vegetales en peligro de desaparición o paisajes integrales en peligro de destrucción o transformación, son en términos generales Patrimonio Natural cuya custodia conservación o en su caso multiplicación es responsabilidad de la Nación.

En resumen, el patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza. También se incluyen aquellos monumentos, lugares y paisajes naturales de significación para las culturas tradicionales y que hacen parte de sus territorios.

El derecho a la participación de los pueblos en las decisiones que les afecte – en término de los derechos territoriales:

- ≠ De acuerdo con lo establecido en la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de 1989 de la OIT, artículos 6 y 7) es obligación de los gobiernos consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que pueda afectarles directamente. Esta medida implica en el caso de las afectaciones a los hábitats naturales y/o aprovechamiento de los recursos naturales de los territorios titulados y/o en uso el cumplimiento del derecho a la consulta previa libre e informada.
- ≠ En cuanto al respeto y protección de la diversidad natural, la Ley 99 de 1993, desarrollando lo estipulado en la Constitución Política de 1991, establece la formulación de los estudios de impacto ambiental – EIA- en los que se contemplan las afectaciones a las comunidades y su participación en los planes de manejo para abordar las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto en el medio ambiente o en las prácticas culturales favorables a la conservación de las comunidades durante las fases de construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación del proyecto (Decretos 216 de 2003, 1220 de 2005, 1572 de 2006, 1760 de 2003). De igual manera establece mecanismos de seguimiento y control en torno a la emisión y/o modificación de las licencias ambientales.

Seguimiento y control.

En términos del seguimiento, vigilancia y control, les corresponde a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y Agrarios, y en Materia de DDHH y Asuntos Étnicos solicitar la información sobre el estado de los procedimientos de protección cuando así lo considere necesario.

3.3.3.1 Otras consideraciones frente a la afectación del patrimonio de las comunidades étnicas.

Actividades Mineras.

La Ley 685 de 2001, Código de Minas, consagró en el Capítulo XIV los derechos conferidos a las comunidades étnicas en relación con la actividad minera. En él se establece que:

“Artículo 121. Integridad Cultural. Todo explorador o explotador de minas está en la obligación de realizar sus actividades de manera que no vayan en desmedro de los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades y grupos étnicos ocupantes real y tradicionalmente del área objeto de las concesiones o de títulos de propiedad privada del subsuelo”.

Artículo 124. Derecho de Prelación de Grupos Indígenas. Las comunidades y grupos indígenas tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera indígena. Este contrato podrá comprender uno o varios minerales.

Artículo 127. Áreas Indígenas Restringidas. La autoridad indígena señalará, dentro de la zona minera indígena, los lugares que no pueden ser objeto de exploraciones o explotaciones mineras por tener especial significado cultural, social y económico para la comunidad o grupo aborígen, de acuerdo con sus creencias, usos y costumbres.

Artículo 130. Las Comunidades Negras. Las comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 1993 o demás leyes que la modifiquen, amplíen o sustituyan, para los efectos de este Código, son también grupos étnicos en relación con los cuales, las obras y trabajos mineros se deberán ejecutar respetando y protegiendo los valores que constituyen su identidad cultural y sus formas tradicionales de producción minera. Este principio se aplicará en cualquier zona del territorio nacional donde se realicen los trabajos de los beneficiarios de un título minero, siempre y cuando estas áreas hubieren sido poseídas en forma regular y permanente por una comunidad o grupo negro”.

Por último, es necesario resaltar que en el caso de los pueblos indígenas se establece el derecho de prelación.

3.3.4 Protección del patrimonio cultural de los territorios étnicos

Matriz de Procedimiento.

ACTIVACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS TERRITORIOS ÉTNICOS	
<i>¿Quién es el responsable?</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Cultura Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH-
<i>¿Cómo se hace?</i>	<p>Activación de mecanismos e instrumentos para la protección del patrimonio cultural de los territorios:</p> <p>Las Direcciones Étnicas del MIJ, sobre la base de información de afectaciones al patrimonio cultural material e inmaterial, solicitan la actuación del Ministerio de Cultura y de las Secretarías Departamentales y Municipales de Cultura para el establecimiento de las medidas de protección y salvaguardia del patrimonio mediante la declaratoria de bienes de interés cultural y/o inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial con prioridad de protección y salvaguardia con la participación y concertación con las autoridades tradicionales. La Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos podrá requerir actuaciones al Ministerio de Cultura y a las Departamentales y Municipales de Cultura que permitan la protección de dicho patrimonio.</p>
<i>¿De qué herramientas se dispone?</i>	<p>Activación de mecanismos e instrumentos para la protección del patrimonio cultural de los territorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Guías metodológicas para la realización de inventarios de patrimonio cultural material e inmaterial (Ministerio de Cultura Dirección de Patrimonio). Inventarios sobre patrimonio cultural material e inmaterial. Procedimientos para la declaratoria de bienes de interés cultural. Revocatoria de las declaratoria de bienes de interés cultural Mapas de riesgo cultural. Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. Planes de Salvaguardia.
<i>¿En qué consiste el trámite preferente de protección de derechos territoriales y patrimoniales?</i>	<ul style="list-style-type: none"> Para protección del patrimonio cultural <p>Consiste en la determinación por parte del Ministerio de Cultura de la declaratoria de los bienes de interés cultural en riesgo para la implementación de los planes de protección y salvaguarda del patrimonio cultural (Declaratoria de Bienes de Interés Cultural; Inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial).</p>
<i>¿Qué resultados se obtienen?</i>	<p>Protección Cultural</p> <p>Puesta en marcha de los mecanismos de protección establecidos por ley, de acuerdo con competencia y funciones del Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Cultura, las Secretarías de Cultura departamentales y municipales.</p>
<i>¿Quién debe hacer seguimiento a la acción institucional desarrollada?</i>	<ul style="list-style-type: none"> El Ministerio Público, en cumplimiento de su mandato legal y constitucional de vigilancia, control y seguimiento, particularmente la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. Las Direcciones Étnicas del Ministerio del Interior y de Justicia. Acción Social en su calidad de coordinadora del SNAIPD. Autoridades y organizaciones étnicas

Solicitud de protección del patrimonio cultural material e inmaterial

Cualquier integrante de la comunidad o de la autoridad tradicional étnica puede solicitar la protección del patrimonio cultural de la comunidad cuando estime condiciones de riesgo, amenaza o evidente pérdida del patrimonio cultural material e inmaterial de la comunidad asociado a las afectaciones al territorio ya descritas.

De no darse las condiciones para que la comunidad o sus autoridades emitan la solicitud de protección, le corresponde a los Consejos Municipales o Departamentales de Cultura emitir dicha solicitud para lo cual elaborarán un informe de riesgo, amenaza o situación de afectación sobre el patrimonio cultural que remite al Ministerio de Cultura, en cabeza de la Dirección de Patrimonio, con apoyo de la Dirección de Poblaciones según sea el caso, y solicita el concepto para valorar afectaciones y/o riesgos sobre el patrimonio como la orientación y definición de medidas para la protección del mismo según sea el caso.

En los mecanismos de protección se tomará en cuenta el concepto de las autoridades tradicionales como los consejos de mayores de las comunidades negras o los taitas de las comunidades indígenas quienes participaran en las definiciones de las medidas a tomar adicionalmente a las declaratorias de bienes de interés cultural.

Solicitud de inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial

Las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial podrán ser incluidas en la “Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial”.

La identificación de las manifestaciones culturales, constituye un componente fundamental para la salvaguardia y manejo del patrimonio cultural inmaterial. Las herramientas para la identificación de dichas manifestaciones es una acción que le corresponde definir al Ministerio de Cultura, en coordinación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Ley 1185 de 2008)³⁸

La identificación de las manifestaciones culturales se hará con la participación activa de las comunidades de acuerdo con lo previsto en la norma. La definición de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial corresponde al Ministerio de Cultura en coordinación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y a las entidades territoriales según lo previsto en el Artículo 8° De la Ley 1185 de 2008.

En todos los casos, la inclusión de manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, deberá contar, según el caso, con el concepto previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, o de los respectivos Consejos Departamentales o Distritales de Patrimonio Cultural.

³⁸ De acuerdo con el Artículo 5 de la ley 1185 que modifica el artículo 8 de la Ley 397 de 1997.

Plan de salvaguardia de las manifestaciones culturales (Patrimonio cultural inmaterial)

Con la inclusión de una manifestación cultural en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se aprobará un Plan Especial de Salvaguardia orientado al fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación. (Ley 1185 de 2008, Art. 8)

La declaratoria de bienes de interés cultural (patrimonio cultural material)

La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá de acuerdo con lo previsto en el siguiente procedimiento, tanto en el orden nacional como territorial:

1. El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria.
2. Con base en la lista de qué trata el numeral anterior, la autoridad competente para la declaratoria definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protección.
3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito nacional, o el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso, emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y Protección si el bien lo requiriere.
4. Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere favorable, la autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan Especial de Manejo y Protección si este se requiriere.

Según lo declarado en el Artículo 8 de la Ley 1185 Parágrafo 1 °. En caso de que la declaratoria surgiere de iniciativa privada o particular se seguirá el mismo procedimiento, en cuyo caso el particular solicitante presentará el respectivo Plan Especial de Manejo y Protección si éste se requiriese, y este será sometido a revisión del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural.

De acuerdo con el Parágrafo 2° es posible la revocatoria del acto de declaratoria de bienes de interés cultural, en cuyo caso corresponderá a la autoridad que lo hubiera expedido, previo concepto favorable del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural, en el caso en que dichos bienes hayan perdido los valores que dieron lugar a la declaratoria.

Tratándose de la revocatoria de declaratorias de monumentos nacionales o bienes de interés cultural efectuadas por el Ministerio de Educación, la revocatoria corresponderá al Ministerio de Cultura. El Artículo 10 de la mencionada norma prevé la inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de los bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas, El Ministerio de Cultura autorizará, en casos excepcionales, la enajenación o el préstamo de bienes de interés cultural del ámbito nacional entre entidades

públicas. Las alcaldías, gobernaciones y autoridades de los territorios indígenas y de las comunidades negras, serán las encargadas de dar aplicación a lo previsto en este parágrafo respecto de los bienes de interés cultural declarados por ellas.

Entes responsables de la declaratoria y funciones.

Los Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural cumplirán funciones análogas al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto del patrimonio cultural del ámbito territorial y de los bienes de interés cultural del ámbito departamental, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras.

Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional.

A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras, a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos.

Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción territorial los declarados como tales por las autoridades departamentales, distritales, municipales, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras, en el ámbito de sus competencias, en razón del interés especial que el bien revista para la comunidad en una división territorial determinada.

Los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras, pueden ser declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura, en coordinación con el respectivo Consejo Departamental o distrital de Patrimonio Cultural, sobre los valores del bien de que se trate.

Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras

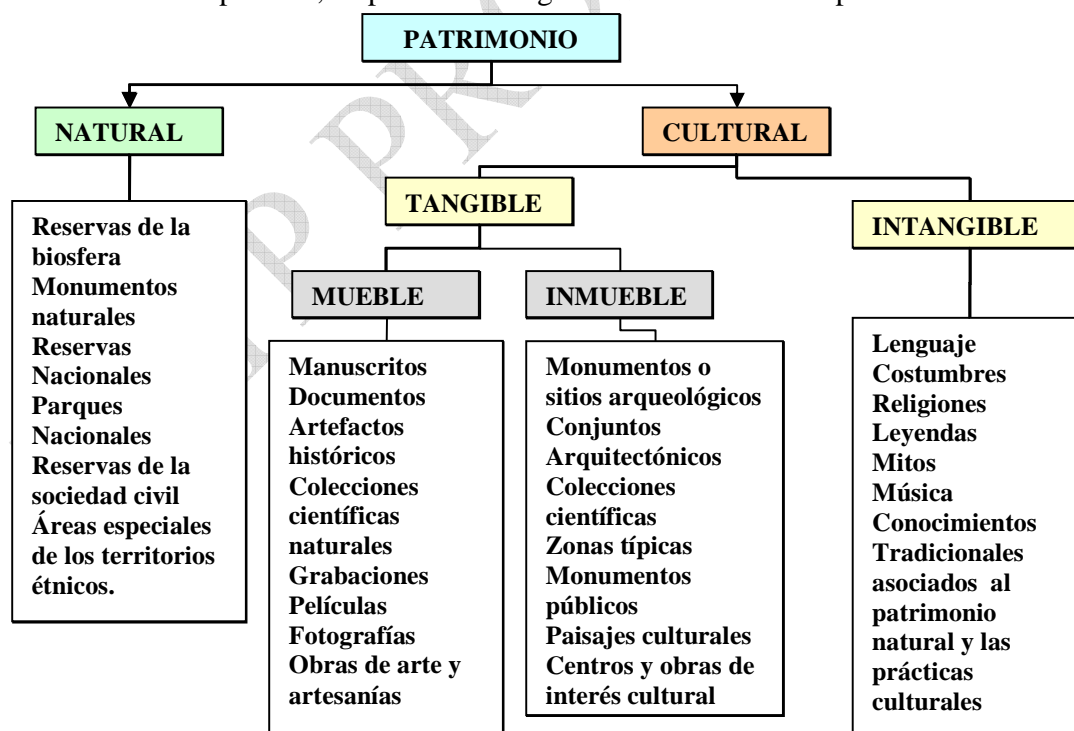
La protección del patrimonio cultural consiste básicamente en:

- ≠ La declaratoria de bienes de interés cultural que tiene como efecto inmediato la inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de los bienes o prácticas culturales mientras persista la medida.

- ≠ En la protección mediante un plan de conservación, salvaguarda y/o manejo especial de los bienes o prácticas culturales asociados a los territorios o comunidades étnicas en situación de violencia, desplazamiento, confinamiento o riesgo por presencia de mega proyectos.
- ≠ En el fortalecimiento y apoyo a la implementación de los reglamentos internos, los planes de uso y manejo de los territorios étnicos en el cual se incluyan medidas de protección y conservación de las prácticas culturales garantes de la integridad cultural diseñados por iniciativa o con participación de las comunidades y sus autoridades tradicionales o legalmente reconocidas.

Importante

- El patrimonio cultural inmaterial está constituido, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.
- El patrimonio cultural inmaterial representa la expresión de la identidad e integridad cultural de los pueblos, su puesta en riesgo o deterioro señala la pérdida de la cultura.



ETAPA 4: Proceso permanente de seguimiento a los avances sobre mecanismos de protección

El proceso de seguimiento es entendido como la valoración permanente de los resultados esperados de los mecanismos de protección de acuerdo con las necesidades y caracterización de las afectaciones a los derechos territoriales y al patrimonio y tiene como propósito el ajuste de los instrumentos de ser necesario para buscar el efecto protector de las medidas.

El seguimiento y valoración de los avances se realizará con la participación de las comunidades, sus organizaciones y autoridades con el apoyo del Ministerio Público y de las Direcciones Étnicas del Ministerio del Interior y de Justicia de acuerdo con sus competencias y funciones (Decreto 4530 de 2008) y con la participación de las entidades competentes relacionadas en las diferentes etapas de la Ruta Étnica según el caso.

La Procuraduría –a través de sus Delegadas- como ente de control del Ministerio Público es responsable de hacer el seguimiento a la función pública requerida en la Ruta Étnica de acuerdo con sus competencias y funciones cuando lo considere necesario.

De acuerdo por lo establecido por la Corte Constitucional, para la superación del “estado de cosas inconstitucional”, exige que el gobierno nacional muestre que ha alcanzado soluciones duraderas para cuyo efecto estableció que en el “...seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, hay diferencias sustanciales en cuanto al ritmo con el cual se avanza en cada uno de estos ejes y respecto de los elementos críticos de cada uno de ellos. Es necesario, entonces, que la entidad coordinadora del SNAIPD distinga y evalúe los avances de cada elemento crítico, así como también el compromiso y desempeño de las entidades responsables para solucionar los problemas. En esta providencia se ordenará la adopción de un sistema de certificaciones para solucionar este problema, si el propio gobierno no diseña un sistema mejor para alcanzar esta finalidad”³⁹. La Ruta de Protección a los Derechos Territoriales de Étnicos (pueblos indígenas y comunidades negras), se constituye como uno de los mecanismos que contribuye a garantizar el goce efectivo de los derechos de las comunidades étnicas en situación de desplazamiento masivo, confinamiento y riesgo, y hace parte de los procedimientos a verificar dentro del sistema de certificaciones del que trata la Corte Constitucional en cabeza de Acción Social.

³⁹ Corte Constitucional, Auto 008 Sentencia T- 025 de 2004 numeral 18.